



Abajo el gobierno de los recortes, del paro y de la represión



**SÍ SE PUEDE
VENCER AL PP**

Editorial ▶ pág. 2

Unificar las luchas con una huelga general de 48 horas

**ESPECIAL
8 páginas**

**Únete
a nosotros
en defensa
de un programa
marxista
revolucionario**



La cuestión nacional en Catalunya se recrudece

Páginas centrales

¡En defensa de un programa de independencia de clase, internacionalista y socialista!

● **Portugal, la lucha sirve** ▶ pág. 3
Huelga General el 14 de noviembre

● **Elecciones vascas y gallegas** ▶ pág. 9 y 12

● **Estudiantes en lucha**
en defensa de la educación pública
▶ contraportada y págs. 14 y 15



¡Abajo el gobierno de los recortes, del paro y de la represión!

¡Sí se puede vencer al PP!

¡Unificar las luchas con una huelga general de 48 horas!

La crisis que atraviesa el capitalismo español se acelera en todos los frentes. En el político, con una desafección creciente, cuando no hostilidad, a las llamadas instituciones del Estado (parlamento, jueces, monarquía, policía...) y una contestación en la calle tan masiva, que sólo se puede comparar a las grandes luchas contra la dictadura franquista. En el social, con un crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento a niveles desconocidos en las últimas cuatro décadas, consecuencia directa de los recortes sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. En el económico, con una caída libre de todos los indicadores, que las medidas de austeridad no hacen sino agudizar.

Crisis orgánica del capitalismo

Después de presentar unos presupuestos para 2013 que conducen a una nueva bajada a los infiernos —con descensos del gasto de un 14% en ministerios como el de Educación y del 22% en el de Sanidad— el gobierno del PP ha conocido las últimas previsiones del FMI para la economía española: el PIB caerá el próximo año el 1,3%, casi el triple de lo estimado por Rajoy, y el déficit público no bajará del 3% hasta 2017. En resumen, todas las medidas de ajuste adoptadas no servirán en ningún caso para estimular el crecimiento, sino para garantizar que la gran banca, nacional e internacional, cobre puntualmente los intereses por la deuda pública española que han adquirido a tipos de usurero, un capítulo que en estos presupuestos representa el primer gasto de Estado ¡más de 32.000 millones de euros! Pero además, la previsión del FMI echa por tierra los cálculos del PP, que al trazar las cuentas para 2013 partían de que la economía sólo retrocedería un 0,5% y el déficit se podría rebajar al 4,5%, algo totalmente descartado si no se aplican nuevos y sangrantes recortes. Todo esto, sin tener en cuenta las contrapartidas que supondrá el rescate a la economía española y que tal como han afirmado tanto el ministro de Economía alemán o como el presidente del Banco Central Europeo, serán contundentes.

Con un colapso de la formación bruta de capital fijo en los últimos cinco años (la caída ha sido de más del 37%); una fuga de capitales que según los últimos datos del Banco de España ascendía hasta el mes de julio (en tasa interanual) a 235.375 millones de euros (casi el 25% del PIB); una contracción de la demanda que continúa sin freno y un descenso claro de las exportaciones, en



un contexto de crisis europea y mundial, la política de recortes sólo agudizará la recesión de la economía española. La perspectiva de más desempleo, menos poder adquisitivo y más pobreza, son el presente y el futuro para la mayoría. Cáritas, en su último informe, revelaba que un 25,5% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras el paro volvió a aumentar en septiembre, con 79.645 nuevos desempleados, cebándose especialmente en los menores de 25 años que soportan una tasa superior al 50%. Paralelamente, la pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera en 2012 será la mayor desde la Transición, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los ingresos de los trabajadores pierden abruptamente terreno en la renta nacional frente a los beneficios empresariales.

Un gobierno débil al que sólo le resta la represión

Es difícil recordar un gobierno que en tan poco tiempo, diez meses, se haya desacreditado tanto y que pierda apoyo tan rápidamente. Según una encuesta de *El País* publicada el pasado 12 de septiembre, el 84% de los votantes no confía en el presidente del gobierno y sólo uno de cada dos votantes del PP (52%) volvería a votar a este partido. Pero las encuestas, las previsiones y las perspectivas pueden empeorar aún más para la derecha.

Estas últimas semanas hemos tenido nuevos ejemplos de la disposición de los jóvenes y trabajadores a plantar batalla a los planes del PP. El último ha sido la histórica movilización del 25 de septiembre, que nos dejó una imagen simbólica y que refleja el clima social existente: decenas de miles de personas rodeando un parlamento aislado, protegido por más de 1.500 antidisturbios, mientras los diputados dentro intentaban dar una imagen de "normalidad" y una "tranquilidad" que no sentían. En las semanas previas al 25-S, tanto el gobierno como sus portavoces en los medios de comunicación afines llevaron a cabo una intensa campaña de criminalización, calificando la movilización como un "golpe de Estado encubierto" y comparándola con el 23-F ¡Increíble!

Una vez más, el gobierno del PP trató de desacreditar el movimiento y atemorizar a la población para impedir el éxito de la convocatoria, pero todos sus intentos fueron infructuosos. Después del 25-S, decenas de miles volvimos a salir a la calle con más fuerza el 29, para denunciar la brutalidad policial y exigir el fin de este gobierno reaccionario.

La salvaje represión policial, con imágenes dignas de las épocas más negras de la dictadura franquista, y las posteriores declaraciones de destacados dirigentes del gobierno, revelaron nítidamente el auténtico talante antidemocrático, no sólo del PP, sino de la burguesía española. La delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha dejado pasar la ocasión para pedir "modular el derecho a manifestación", es decir, crear un estado de excepción contra las protestas sociales, utilizando los tribunales como complemento de las porras de los antidisturbios. En la misma línea también se han manifestado el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón o el fiscal general del Estado. Incluso el dirigente del PP Mayor Oreja ha llegado a decir que es un "disparate que se televisen todos los problemas del orden público con cámaras de televisión, porque incitan a manifestarse". Especialmente virulenta ha sido la reacción contra el auto del juez Pedraz, después de dejar en libertad a ocho de los organizadores de la protesta, mostrando que el respeto de la burguesía y la derecha a la justicia depende de si sus sentencias les son favorables o no. Este tipo de declaraciones no sólo son un reflejo del carácter totalitario de la clase dominante española, también expresan su pánico ante la inevitable explosión social que provocará esta política de constantes ataques a la clase obrera.

Otra reminiscencia patética del carácter totalitario del actual gobierno fue la antológica frase de Mariano Rajoy alabando "a la mayoría silenciosa que no se manifiesta", el mismo argumento utilizado por Franco cada vez que dictaba una pena de muerte o reprimía a trabajadores. *El País* del 7 de octubre publicaba una encuesta que no dejaba dudas sobre qué opina esa "mayoría silenciosa". El 77% de los encuestados comparte y apoya los motivos de la protesta del 25-S; un 91% cree que la crisis la están pagando todos menos los bancos y los más ricos; y a la pregunta sobre lo que podría ocurrir si la situación no mejora, un 91% cree que habrá manifestaciones masivas frecuentes; un

64% asaltos a comercios y un 79% que estallarán protestas violentas.

La lucha sí sirve. Del 25-S a la huelga general

El movimiento obrero, los parados, la juventud, los jubilados, hemos demostrado que no aceptamos los ataques del gobierno: desde la huelga general del 29-M, la marcha minera, las manifestaciones masivas del 19 de julio y el movimiento jornalero en verano, hasta la marcha a Madrid del 15-S y las grandes movilizaciones del 25-S, del 29-S y del 7 de octubre, somos millones los que no nos resignamos, los que queremos llegar hasta el final en la defensa de nuestros derechos y de nuestro futuro.

Ante esta situación, los dirigentes de UGT y CCOO deben escuchar la voz de la calle, de su base, de los miles de trabajadores en lucha en numerosos sectores, de la juventud estudiantil, y proponer un programa contundente de acción para echar atrás los ataques de la derecha. Es increíble que en un momento como el que vivimos, Toxo y Méndez sigan con su política de dilación y confusión, posponiendo la convocatoria de la huelga general mientras ésta se convierte en una de las principales consignas de la clase obrera en todas las movilizaciones. Es increíble que el 7 de octubre se perdiera de nuevo la oportunidad de lanzar la fecha para una nueva huelga general, y que ambos dirigentes la condicionen a que el gobierno del PP organice un referéndum sobre los recortes ¡Eso nunca va a suceder! Pero es más, que los sindicatos lo organicen es, simplemente, dar un paso atrás en el nivel de movilización y protesta alcanzado. ¡Lo que hace falta es unificar las luchas, ampliarlas, extenderlas y endurecerlas, hasta lograr derrotar al gobierno!

Muchos medios de comunicación ya sitúan la fecha de la huelga general el próximo 14 de noviembre, después de que en la reunión de la Cumbre Social en Madrid diferentes colectivos, entre los que destaca el Sindicato de Estudiantes, la exigieron con firmeza. Esta fecha podría suponer que la huelga general coincidiese también con la que ha lanzado la CGTP en Portugal, incluso con otra posible en Grecia. Se trataría, de plasmarse, de una auténtica huelga general en el sur de Europa ¡Un gran paso adelante en la lucha contra las políticas de recortes y en la unidad de la clase obrera europea que combate a un mismo enemigo, la burguesía! Esta perspectiva de huelga general demuestra el avance tremendo en la conciencia política de los trabajadores, pues sin la presión de abajo, sin el constante desbordamiento de las direcciones sindicales (que todavía creen en un capitalismo de rostro humano y alaban las políticas de pacto social) no sería posible algo semejante.

No son pocos los que, desde las filas de la burguesía, plantean abiertamente que el Estado español se prepara para una situación semejante a la de Grecia. La previsible solicitud de rescate, que sólo se retrasa por el temor de Rajoy a las consecuencias brutales que tendrá en la lucha de clases, remarca el carácter histórico de los momentos que vivimos. Cientos de miles de jóvenes, de trabajadores, de desempleados, estamos pasando por una dura escuela de aprendizaje, cuya lección principal está clara: hay que transformar la protesta social en organización y lucha política consciente, para derrocar el capitalismo y transformar la sociedad en líneas socialistas.



PORTUGAL Huelga general el 14 de noviembre

La movilización masiva consigue una primera victoria

La clase obrera tiene la fuerza para derrotar a los capitalistas

El viernes 7 de septiembre el primer ministro portugués, Passos Coelho, anunciaba por televisión y en horario de máxima audiencia las nuevas medidas adoptadas por su gobierno; el punto estrella era la reducción salarial del 7% a todos los trabaja-

dores a partir de 2013, a través del aumento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social (Taxa Social Única) del 11 al 18% (equivalente a la pérdida de un salario entero repartido en un año) y a la vez que se reducía la contribución de los em-

presarios del 23,75% al 18%, en un trasvase de más de 2.000 millones de euros desde los bolsillos de los trabajadores a los de los empresarios. Era la gota que colmaba el vaso de la ira y el descontento popular.

Miriam Municio

Este brutal ataque se enmarca dentro de la presentación de los Presupuestos Generales de 2013, que conllevan un ahorro de 4.900 millones de euros respecto a los de 2012¹, y que incluye también la disminución del número de funcionarios y nuevos recortes a su salario², más privatizaciones, endurecimiento de los criterios para obtener subsidios sociales y de desempleo, etc. Coelho y su ministro de Finanzas, Vitor Gaspar, trataron de justificarlo con el cínico argumento de “crear empleo” y apelando al “esfuerzo de todos” para salir adelante. Ese descarado intento de engaño no hizo más que aumentar la indignación general desencadenando una respuesta inmediata de los trabajadores y la juventud portuguesa. Un estallido social que pilló por sorpresa al gobierno, que subestimó la capacidad de respuesta de las masas tras meses y meses soportando constantes recortes.

Tras casi año y medio desde el rescate de la economía portuguesa (78.000 millones de euros en tres años) y de las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de la derecha (PDS en coalición con el CDS-PP) los únicos resultados han sido una población cada vez más empobrecida y una economía en profunda depresión, siguiendo la estela de Grecia. En este periodo se han destruido 300.000 puestos de trabajo, el salario medio se ha situado entre los 700 y 800 euros y el salario mínimo en 475 euros. A la vez, los impuestos no han dejado de aumentar, el IVA se ha colocado en el 23%, el transporte público se ha disparado, ir al médico de cabecera cuesta 5 euros y 20 las urgencias. Los recortes en el gasto público han sido la tónica habitual así como las agresiones a las condiciones laborales: contrarreforma laboral, eliminación de festivos, aumento de la jornada laboral para los trabajadores del sector público, eliminación de pagas extras a los funcionarios y pensionistas, recortes en educación y sanidad públicas... Y el futuro no es muy alentador. Según las previsiones del FMI, la economía portuguesa se contraerá un 3% en 2012 (otras fuentes hablan de al menos el 3,5%) y un 1% en 2013 (otros, de un mínimo del 1,5%), el paro rozará el 16% y el consumo interno cae casi un 6% en lo que va de año. En este escenario, la decisión de la Troika ha sido, ante la evidencia de que era imposible llegar al objetivo de déficit del 3% en 2013, “suavizar” los plazos (hasta 2014), ningún cambio en una política de recortes que pretende que la crisis de los capitalistas la paguemos los trabajadores.

La mayor manifestación desde el Primero de Mayo de 1974

El sábado 15 de septiembre, una marea humana de alrededor de un millón personas, según cifras de la propia prensa burguesa portuguesa, salió a la calle en 40 ciudades lusas en una convocatoria a través de las redes sociales, y a la que se sumaron los partidos de izquierda y los sindicatos, bajo el lema “Al diablo con la troika. Queremos nuestras vidas”, y en la que los organizadores propusieron una huelga general popular que pare por completo Portugal. En Lisboa salieron a la calle 500.000 personas, que al llegar a la sede de la Asamblea de la Repú-



blica gritaban: “los ladrones están ahí dentro” y apelaban a la policía a detener a los diputados; en Oporto alrededor 150.000 manifestantes coreaban: “¡Gobierno, dimisión!” o “¡Las calles sin miedo!” a la vez que se pedía una “¡Huelga Ibérica ya!”; en Coimbra unas 20.000 personas, entre sus consignas: “España, Grecia, Irlanda y Portugal nuestra lucha es la misma”, y así decenas de miles más se manifestaban en las calles de Viseu, Braga, Setúbal, Aveiro, Guimarães, Bragança, Évora, Vila Real... en la movilización más importante desde el Primero de Mayo de 1974, inmediatamente después de la caída de la dictadura y del triunfo de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril del mismo año. Una manifestación histórica, tanto por su extensión y masividad como por sus consecuencias políticas, al obligar al gobierno a retroceder. Una primera e importantísima victoria del movimiento contra los planes de la burguesía, que pone de manifiesto la colosal fuerza de la clase obrera y la juventud cuando se pone en marcha.

Tras la fuerza demostrada el 15-S la siguiente cita para el movimiento fue el viernes 21 de septiembre a las 18 horas, esta vez frente al Palacio de Belém, sede del Consejo de Estado, convocado por el presidente Cavaco Silva para discutir las medidas anunciadas, y donde miles y miles de jóvenes y trabajadores exigieron la suspensión de las últimas medidas de austeridad y la destitución del gobierno.

La radicalización política que se vive en Portugal ha tenido su expresión también en fuertes tensiones dentro del aparato del Estado. No es ningún detalle el comunicado hecho público tras el 15 de septiembre, de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas portuguesas (AOFA), firmado por su presidente, el coronel Manuel Martins Cracel, en el que se afirma que “las tensiones sociales son muy graves y están causando protestas y manifestaciones” ante las que “las Fuerzas Armadas de la Asociación de Oficiales reitera su compromiso con los militares de que nunca aceptará el uso de la represión contra los ciudadanos”. Señala además, “Queremos extender nuestra más cordial solidaridad con todos los portugueses que sufren el peso de los terribles sacrificios que se están imponiendo” y rechazan que “debamos aceptar la imposición de sacrificios para conseguir una supuesta solución” que nunca llega y que siempre pagan los mismos “mientras que al mismo tiempo, ya sea en Portugal o en otro lugar, se acu-

mulan riquezas sin límite, evitando que otros puedan obtener salarios justos”.

Hacia una situación revolucionaria

El temor a las consecuencias de una explosión social con un gobierno completamente deslegitimado, intervenido y con grandes tensiones internas (hay divisiones en el PSD, con miembros que se quisieron desmarcar de las últimas medidas, se está resquebrajando la coalición con sus socios de gobierno del CDS-PP y el PS ha retirado su apoyo, hasta ahora sin fisuras, a las políticas de austeridad y a los presupuestos de 2013) llevó a Cavaco Silva a maniobrar, convocando la reunión del Consejo de Estado. El objetivo: tratar de contener la situación, evitar que pudiera desembocar en una crisis política abierta con la caída del gobierno incluida, caos económico, el movimiento de masas en la calle y a la ofensiva y abriendo un escenario revolucionario con consecuencias dentro y fuera de las fronteras portuguesas, tanto en el terreno económico como en el de la lucha de clases. A la vez, trataba de preservar su propia autoridad de cara a acontecimientos futuros, apelando a que “hay que escuchar al pueblo”. Tras ocho largas horas de reunión, de madrugada, se hacía público un comunicado de la Jefatura del Gobierno en el que plantea “estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas”. El gobierno tenía que ceder a la presión de la calle y el Consejo de Estado hacía un llamamiento al gobierno para realizar “esfuerzos para consolidar las finanzas públicas a fin de que se mejore el empleo preservando la cohesión social”, y recalando que daban por “superadas las dificultades que podían afectar a la solidez” de la alianza de gobierno.

La burguesía portuguesa desea que con esta cesión pueda recomponerse un escenario de estabilidad política y paz social, e intentará basarse en los dirigentes de las organizaciones de la izquierda reformista y sindicales para ello. Muy sintomático, en este sentido, fue la reunión celebrada el 24 de septiembre de Passos Coelho a la que acudieron empresarios y sindicatos para tratar de volver a la normalidad y crear un clima de unidad nacional para tratar de aplacar el movimiento y continuar con la agenda de la burguesía.

En todo caso, las propias palabras de Coelho al término de la citada reunión muestran el límite que tienen: “La propuesta tie-

ne que ser aceptada también por nuestros acreedores internacionales. Portugal se encuentra en una situación en la que ya no tiene autonomía financiera, por lo que es indispensable que estas medidas sean bien acogidas por la troika” (*La Vanguardia*, 24/09/12). El consejo de ministros extraordinario convocado el miércoles 26 para decidir las medidas se alargó durante más de siete horas, lo que demuestra las tensiones y la crisis política que vive, y no se ha querido hacer público nada más concreto, en un intento de evitar volver a echar más leña al fuego de la movilización. Y es que el sábado 29 de septiembre estaba convocada por la CGTP una marcha a Lisboa contra los recortes, a la que llamaron a participar todos los convocantes de las movilizaciones del 15 y 21 de septiembre, y a la que anunciaron su asistencia militares y policías. Nuevamente centenares de miles de personas salieron a las calles poniendo de manifiesto que, ni mucho menos, se ha dicho la última palabra y reivindicando la necesidad de una huelga general como siguiente paso.

Hay un choque de intereses brutal, entre una minoría de parásitos y la inmensa mayoría de la sociedad portuguesa. El 8 de octubre el Eurogrupo examinará las cuentas públicas portuguesas y en noviembre la troika regresará al país para determinar si continúan con el desembolso del siguiente tramo del rescate. Por otro lado la victoria conseguida por la lucha de masas ha sido una inyección de moral para los trabajadores y jóvenes de Portugal, que son plenamente conscientes de que los ataques van a continuar y que habrá que volver a responder.

Finalmente, el 3 de octubre el gobierno portugués, en palabras de su ministro de Finanzas, anunció un “enorme aumento” de los impuestos, especialmente el de la renta³. También anunció que en 2014, para seguir reduciendo el déficit, se recortará el gasto público en más de 3.300 millones de euros en “prestaciones sociales, educación y seguridad”. Y efectivamente, el empuje y decisión del movimiento de masas ha llevado a la CGTP a convocar una huelga general de 24 horas el próximo 14 de noviembre. Una huelga que se convoca por la presión desde abajo del movimiento.

Los efectos de la lucha en Portugal están teniendo un gran impacto en Grecia y en el Estado español, donde se está produciendo un claro repunte de la movilización contra la política de recortes y donde hay un clamor para que los dirigentes sindicales convoquen ya una huelga general, que debería ser conjunta con los trabajadores portugueses, convirtiéndose en un referente para el conjunto de la clase obrera europea. La lucha en el sur de Europa está cada vez más interconectada y sin duda tendrá un efecto expansivo en toda Europa. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Frente a la catástrofe social provocada por el capitalismo: ¡una huelga general europea! ¡Por una Federación Socialista Europea!

1. Una cantidad equivalente a alrededor del 25% de la masa salarial de todos los funcionarios portugueses.
2. Los intereses anuales que paga Portugal por su deuda pública llegan casi a los 9.000 millones de euros, casi la mitad de lo que cuesta pagar a los funcionarios, según el economista João Abel de Freitas.
3. La presión media del impuesto de la renta (IRS) pasará del 9,8% al 13,2% en 2013 y se reducirán los tramos fiscales de 8 a 5.

En vísperas del nuevo gobierno del PRI: revolución y contrarrevolución en México

En los últimos meses y semanas México ha experimentado acontecimientos trascendentales para la lucha de clases. Lejos del optimismo de 2010, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 5,5%, tras la contracción sufrida un año antes del -6,5%, la más severa en setenta años, el nerviosismo es aho-

ra el común denominador de los estrategias de la burguesía. Ven con preocupación la tendencia a la baja de la economía nacional en los dos últimos años, con un crecimiento del 3,9 y 3,5% respectivamente. Y si bien el Banco Mundial pronostica una ligera mejora para 2013 (4%), los propios balances de dicha

institución señalan que en 2014 el crecimiento apenas alcanzará el 3,9%. En buena medida ese desenvolvimiento está muy asociado con la dinámica de la economía yanqui, para la cual se prevé un raquíptico crecimiento en 2012 y 2013 de 2,1 y 2,4% respectivamente.

Luis Enrique Barrios

En ese marco y ante la perspectiva de una nueva recesión, la burguesía se ha visto obligada a redoblar esfuerzos y luchar a toda costa por profundizar la estrategia que ha empleado en los últimos 30 años, lapso en el que los salarios se devaluaron un 80%. Los capitalistas lograron que de 1980 a 2006, por ejemplo, el volumen de sus ganancias en proporción con el PIB pasara del 56,3 al 61,9%, mientras que al mismo tiempo el valor de la masa salarial decreció del 36% al 28,6%. El crecimiento del PIB en 2010 reposó sobre la espalda de los trabajadores, puesto que mientras la producción manufacturera repuntó en un 43% y la productividad de los obres se desarrolló en un 5,8%, el costo unitario de la mano de obra en dicho sector se redujo un 9%.

Fraude electoral y contrarreforma laboral

Este es el escenario en el que se producía la contienda electoral y la burguesía no titubeó jamás en evitar a toda costa perder el control sobre el Estado, aunque fuera de forma marginal. Bajo las condiciones actuales el capitalismo no puede tolerar la reforma más tibia que pretenda aligerar modestamente la enorme carga que pesa sobre la clase trabajadora. En esencia esa es la explicación de fondo que motivó a la burguesía a actuar de la forma más osada y cínica posible implementando un nuevo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 1 de julio que le dio al PRI y a su candidato, Enrique Peña Nieto (EPN), casi 19 millones de votos, es decir, el 100% más que lo alcanzado por este partido en las presidenciales de 2006, cuando apenas superó los 9 millones. Con Enrique Peña al frente se pretende que el Estado siga siendo el principal garante de la política de choque contra la clase trabajadora, objetivo que podría verse limitado por un gobierno dirigido por López Obrador (AMLO) el cual estaría enormemente presionado por las clases desheredadas que demandan justicia social.

Prueba de la importancia que esta medida ha tenido para la burguesía fue la inmediata confianza que sintió tras los días 30 y

31 de agosto, días en que el tribunal electoral convalidó las elecciones y EPN fue proclamado como presidente electo, y el 9 de septiembre, fecha en la que en los hechos López Obrador renunció a cualquier forma de lucha seria contra el fraude electoral. Tras el 1 de julio AMLO optó por no llamar a las masas a movilizarse y a cambio depositó toda su apuesta en la vía legal, por medio de la impugnación de las elecciones; sin embargo, la puntilla para el movimiento sería el 9 de septiembre cuando en pleno mitin en el Zócalo de la Ciudad de México el máximo dirigente de la izquierda llamó a sus seguidores a debatir sobre la idea de mantener a Morena como organización social o transformarlo en un nuevo partido político. Así, la imposición de EPN en el poder y la lucha contra el fraude quedaron relegadas a un aspecto secundario y marginal.

En ese contexto, el aún presidente Felipe Calderón (PAN), a pesar de estar en la recta final de su gobierno, se lanzó a un nuevo ataque: una contrarreforma laboral que eliminará importantes derechos de los trabajadores, muchos de ellos a través de la contratación por hora. Dicha medida fue aprobada el 28 de septiembre por los diputados del PRI, del PAN y demás partidos de derecha. Los dirigentes del sindicalismo independiente, los cuales arengaban apenas hace un par de semanas sobre la convocatoria de la huelga general, ahora están proponiendo como centro de la lucha la impugnación de la contrarreforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lucha de clases

Esos episodios podrían representar el fin del paréntesis de casi doce años en los que los gobiernos del PAN (con Fox y Calderón) estuvieron semiparalizadas en el impulso de las contrarreformas más añoradas por la burguesía a consecuencia de la acción de las masas proletarias en las calles. Se trató de un periodo en el que incluso, como en 2006, se presentó la oportunidad para que los trabajadores tomaran el poder. Sin embargo, toda esa energía ha sido desperdiciada por la dirección del movimiento, factor que está siendo aprovechado por la burguesía para atacar. No es descartable que en



meses el nuevo gobierno del PRI impulse una contrarreforma fiscal para eliminar la tasa cero en el IVA para alimentos y medicamentos y, acto seguido, ir a por una privatización clásica del sector energético, Pemex y CFE, o al menos profundizar de manera más agresiva la “privatización silenciosa” de ambas paraestatales.

La crisis del capitalismo impone dos realidades a la lucha de clases. A pesar de la aprobación de la contrarreforma laboral, para la burguesía aún no es suficiente y necesita apabullar más todavía las condiciones de vida de los trabajadores (desmantelar la seguridad social, aplastar las pensiones, eliminar el reparto de utilidades y los aguinaldos...) y, por otro lado, el Estado no puede comprar la paz social y requiere recortar más las conquistas sociales, entre ellas la educación pública. Todo ello, para mala fortuna de los dirigentes sindicales, pone en el centro de los ataques al movimiento obrero. Y los síntomas de que existe un importante ambiente de lucha y un cambio en la situación ya empiezan a notarse. Es el caso de dirigentes como Agustín Rodríguez del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y miembro de la dirección colegiada de la UNT, pero también otros dirigentes que se han visto obligados a plantear la posibilidad de pasar a la huelga general como forma de lucha. Otro síntoma es el de los 4.000 obreros de Nissan tomando en dos oportunidades la ca-

rrera México DF-Cuernavaca protestando contra el reciente ataque; destacamos este caso porque salvo los mineros, la actividad política de los sindicatos de industria ha sido baja en los últimos años, el caso de Nissan puede ser un anticipo de la entrada a medio plazo de este tipo de batallones a la lucha de clases.

Por otra parte, el surgimiento del movimiento #YoSoy132 en mayo pasado, la primera expresión del movimiento estudiantil de alcance nacional desde 1968, también es un síntoma digno de destacar. Y precisamente el 2 de octubre, cuando se cumplían 44 años de la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, varias escuelas de la UNAM, del IPN y de la UAM, todas en el DF, han respondido favorablemente al llamado de huelga estudiantil de 24 horas. Seguramente este hecho inédito en años se esté dando en varias decenas más de colegios y universidades de distintas ciudades del país.

Existen síntomas importantes de lo que se está cocinando en las entrañas del movimiento obrero y juvenil y llegado el momento toda la rabia acumulada brotará sobre la superficie, lo que se está gestando en México es nuevo choque de trenes. La estabilidad social no es el escenario más probable para el nuevo gobierno del PRI. Ante este panorama resulta doblemente trascendente una alternativa revolucionaria que llame al movimiento obrero a expropiar a los capitalistas bajo el control democrático de los trabajadores.

Masiva huelga general en Grecia el 26 de septiembre

Alicia Cuesta

El pasado 26 de septiembre una nueva huelga general paralizó Grecia. Convocada por los dos principales sindicatos, ADEDY (sector público) y GSEE (sector privado), obtuvo un seguimiento masivo. Según los sindicatos el paro fue total en los astilleros, transporte marítimo y refinerías; del 90% de los empleados portuarios y de la construcción y en las grandes empresas públicas; del 85% en la industria metalúrgica y del 80% entre los trabajadores de hostelería, comercio y bancos. Los sindicatos destacaron que, por primera vez, hay una participación significativa del sector hotelero y del pequeño comercio.

Las manifestaciones fueron masivas en las principales ciudades, desta-

cando los 150.000 manifestantes en Atenas, a pesar de que la policía se empeña en hablar de 35.000. Una verdadera demostración de fuerza contra el nuevo plan de ajuste (13.500 millones de euros para 2013 y 2014) que negocia el gobierno de Samarás con la troika y que se concretará en 11.500 millones de recortes presupuestarios y otros 2.000 millones de nuevos ingresos, con más aumento de los impuestos. El plan incluye elevar la edad de jubilación a los 67 años, implantar la jornada laboral de 13 horas seis días a la semana, más recortes de salarios y pensiones, más despidos...

Los testimonios en las manifestaciones del 26 hablan por sí solos: “Los trabajadores de la sanidad están al borde de la pobreza. Las enfermeras co-

bran ahora 600 euros y los médicos, 1.200. Desde febrero no nos pagan las guardias. Cierran hospitales y nos falta material”, señalaba Maria Mitselos, médico, y concluía: “Pero lo peor es que la sanidad ya no es gratuita y la gente que está en el paro y ha perdido su seguro no puede costársela”. Lo mismo ocurre con otros servicios como el transporte y la educación. En el marco de una recesión profunda (desde 2008 el PIB griego ha retrocedido entre un 25 y un 30%, y según el FMI en 2013 caerá un 4%), de una creciente pobreza, paro y precarización laboral (en los últimos tres años los salarios se redujeron una media del 30%, los costes laborales descendieron un 8% y la tasa de paro se triplicó), los nuevos recortes no hacen más que aumentar la deslegi-

timación del gobierno y avivar la lucha de clase.

Para empezar, el 9 de octubre los sindicatos han vuelto a convocar un paro de tres horas desde el mediodía y una manifestación en Atenas frente al Parlamento para protestar contra la visita de Angela Merkel, que se reunirá con el gobierno y los principales empresarios del país. A pesar de que, en una muestra más de lo poco que valen los derechos democráticos para la burguesía, la ciudad estará tomada literalmente por la policía (unos 7.000 agentes) y de que se han prohibido las manifestaciones en las zonas céntricas —el distrito gubernamental de Atenas, seis estaciones de metro y varios colegios del centro estarán bloqueados por la policía— no podrán evitar el clamor popular contra los ataques de los capitalistas.

William Sanabria
Corriente Marxista Revolucionaria • Venezuela

VENEZUELA Elecciones presidenciales del 7 de octubre

La movilización de las masas derrota la amenaza contrarrevolucionaria

Hugo Chávez ha ganado claramente las elecciones presidenciales venezolanas del 7 de octubre. Con un 95% de los votos contados, Chávez obtiene un 55% (7.963.061 votos) frente al 44,39% (6.426.686 votos) del contrarrevolucionario Capriles Radonski. Estos resultados se producen tras la mayor participación electoral de la historia venezolana: 80,9%. Chávez gana en 22 de los 24 estados y el número de sufragios representa el mayor respaldo obtenido nunca por ningún presidente venezolano.

La clave de esta victoria ha sido que las masas explotadas de los barrios populares de las ciudades y del campo se han movilizado masivamente en apoyo a Chávez y al proceso revolucionario, como ya pasó en anteriores elecciones presidenciales, en agosto de 2004 para evitar la revocación del presidente o cuando se derrotó en la calle el golpe de Estado y el paro patronal en 2002 y 2003.

En este caso, además, el peligro de una victoria de la reacción era muy real. La derecha contrarrevolucionaria venía fomentando un discurso de euforia entre sus bases y centrando su campaña en las contradicciones internas y fallas de la revolución, prometiendo demagógicamente “el oro y el moro” a los sectores más desmoralizados de las masas con el objetivo de que sectores que otras veces apoyaron a Chávez no votasen o lo hiciesen por Capriles. Éste, miembro de una de las principales familias burguesas y procedente de la ultraderecha (militó en su juventud en la secta fascista Familia, Tradición y Propiedad y dirigió como Alcalde del Municipio Baruta el asalto a la embajada cubana durante el golpe de 2002) y líder de Primero Justicia (PJ), partido hermano del PP, no dudó en presentarse como “admirador de Lula”, “progresista” y prometer mantener y ampliar los programas sociales de Chávez.

Pero el instinto de clase de las masas, su conciencia y voluntad de seguir empujando hacia delante la revolución se han impuesto. La impresionante toma de Caracas el 4 de octubre, la marcha más masiva realizada a lo largo de este proceso revolucionario, ya demostró que las bases revolucionarias estaban alerta y movilizadas. Más que una marcha fue una toma total de la capital que desbordó las siete avenidas inicialmente previstas y paralizó toda Caracas. Nada que ver con la movilización opositora del domingo 30 de septiembre, que los medios de comunicación burgueses presentaron como “la mayor de la historia de Venezuela” y que, aunque movilizó a un número significativo de opositores, sólo llenó parcialmente una de esas mismas siete avenidas.

Las masas obreras y populares entendieron claramente que lo que estaba en juego era la posibilidad de que la contrarrevolución llegara al poder y lanzase un ataque decisivo contra los avances conseguidos durante estos trece años de revolución y contra otros muchos derechos y reivindicaciones obreras y populares que todavía están pendientes.

El descontento de las bases y la lucha por defender y completar la revolución

Uno de los problemas de la revolución bolivariana desde la derrota en el referéndum de la reforma constitucional en diciembre de 2007 es que entre dos y tres millones de votantes que apoyaron a Chávez en las presidenciales de 2006 se han abstenido en los siguientes procesos electorales. En barrios obreros y populares donde históricamente Chávez ganaba con el 65, 70 e incluso 80% de los votos, estos porcentajes habían disminuido en las últimas convocatorias al 60% e incluso 55%. El 7 de octubre la clase media y una parte de los sectores más atrasa-



dos de las masas se movilizó siguiendo la demagogia de Radonski pero los barrios populares volvieron a movilizarse masivamente, alcanzando porcentajes bastante cercanos a los de 2006 y 2004.

Estos resultados no son ningún cheque en blanco ni una vuelta a las elecciones de 2006. En estos seis años las masas, y especialmente los centenares de miles de activistas obreros y populares que componen su vanguardia, han vivido experiencias decisivas que les están haciendo sacar conclusiones cada vez más avanzadas.

Las contradicciones que se acumulan en las empresas nacionalizadas, donde —tras luchar durante años contra los capitalistas— los trabajadores están teniendo que enfrentarse al sabotaje contrarrevolucionario y los ataques a sus derechos por parte de los burócratas del Estado (la llamada “quinta columna”). El debate sobre el control obrero, donde lo que se ha hecho (nombrar a trabajadores como directivos sin poner el control y la dirección de la empresa realmente en manos de los trabajadores) no sirve para lograr los objetivos de controlar realmente la empresa, acabar con el burocratismo y las co-rruptelas y desarrollar la producción garantizando y mejorando los salarios y derechos de los trabajadores. Los propios Consejos Comunales, que debían —según el propio Chávez tras las elecciones de 2006— llevar a un Estado comunal basado en el poder popular que sustituyese al Estado burgués, no lo han hecho. Todas estas luchas y experiencias están haciendo sacar conclusiones revolucionarias a las masas.

En muchos actos electorales éstas aprovecharon la movilización de apoyo a Chávez para llevar pancartas y lanzar consignas contra muchos gobernadores y alcaldes bolivarianos. Durante las últimas semanas de campaña los trabajadores de varias empresas clave nacionalizadas durante los últimos años (Sidor, Abastos Bicentenario y las empresas del cemento o Petrocasa) protagonizaron movilizaciones masivas en las que, al mismo tiempo que manifestaban su apoyo a la revolución y a Chávez exigían solución a sus problemas y denunciaban a la burocracia.

Si analizamos cuidadosamente los resultados del 7 de octubre vemos también ese descontento. Con un censo incrementado en casi cuatro millones de votantes respecto a 2006, la oposición aumenta sus votos, comparando con entonces, en más de 2 millones y la revolución en alrededor de 800.000, difícilmente llegará al millón. Por estados, el descontento existente en las filas revolucionarias se manifiesta claramente. Mientras en estados donde gobierna la oposición la revolución mejora sus resultados (el Zulia —que además es el estado más poblado del país— es el caso más claro, con un 55-45%

a favor de Chávez) en otros gobernados por dirigentes bolivarianos se pierde (Mérida) o se obtienen resultados muy ajustados. Es el caso de Bolívar, aquí se ubica la industria pesada —Sidor y otras— y el gobernador ha sido muy cuestionado. O Anzoátegui, donde el gobernador Tarek William Saab ha abandonando los barrios, desoído al pueblo y apoyado a la multinacional Mitsubishi contra la lucha de los trabajadores dirigidos por el sindicato revolucionario Singetram y la diferencia es 51-49%, cuando habitualmente Chávez cosechaba más del 60% de los votos.

Organizarnos para completar la revolución y acabar con los capitalistas y burócratas

El presidente Chávez ha visto estas muestras de descontento y en la entrevista que le realizaban varios periodistas la noche de cierre de campaña planteaba la idea de reconvertir el Ministerio de la Presidencia en una especie de unidad de seguimiento y control para garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los planes. Esto refleja un intento de querer responder a los problemas, pero es necesario abrir un debate a fondo sobre cuáles son las medidas que garantizan realmente que la revolución llega hasta el final y resuelve los problemas existentes y cuáles no. El nombramiento de un grupo de activistas como funcionarios, por muy revolucionarios que sean, ya se ha ensayado en otras revoluciones. Esto por sí solo no ha resuelto los problemas de burocratismo, ineficiencia, sabotaje o corrupción. Al contrario, en algunos casos esos mismos cuerpos o instituciones llamadas a controlar las desviaciones han acabado burocratizándose, desviándose y corrompiéndose. La clave es sustituir la vieja estructura del Estado, que sigue siendo burguesa, por un verdadero Estado revolucionario. El poder debe estar en manos de consejos de trabajadores, campesinos y vecinos, elegibles y revocables democráticamente en todo momento. Cada uno de estos consejos debe designar voceros —insistimos: elegibles y revocables en todo momento— a consejos centrales a escala local, estatal y nacional culminando en una Asamblea Nacional de Consejos Obreros y Populares y comunas socialistas que ejerza el poder. Los cargos y responsables electos deben cobrar el salario de un trabajador cualificado.

Otro aspecto clave es que la revolución no podrá seguir manteniéndose sobre la base de utilizar los ingresos del petróleo (que, además, se verán afectados por la crisis capitalista mundial antes o después) para construir viviendas, dar pensiones, mejorar la salud y educación, etc., sin tocar la propie-

dad privada de los medios de producción. La gran mayoría de bancos y fábricas sigue controlada por la burguesía venezolana y las multinacionales imperialistas, que utilizan este control para sabotear la economía y llenarse los bolsillos mientras los trabajadores y el pueblo seguimos sufriendo lacras sociales como la pobreza, desempleo, déficit habitacional, inseguridad... Los empresarios siguen utilizando una mínima parte de la capacidad productiva de sus empresas (entre un 42 y un 52%, según ellos mismos). Y eso pese a las facilidades que les ha dado el gobierno: Fondos Bicentenario y otros, dólares preferenciales... Los datos oficiales hablan de un 6 o 7% de desempleo, pero un 65% de la población económicamente activa sigue trabajando en la economía informal. Los empresarios —y lamentablemente también muchos gerentes de empresas públicas— incumplen la Ley del Trabajo y aplican políticas antiobreras y antisindicales.

En ese sentido los llamados por parte de distintos dirigentes bolivarianos a sectores de la alta burguesía a que ellos también deberían votar a Chávez y que sus intereses y propiedades no serán cuestionados, dificultan el objetivo de comprender cuáles son las tareas inmediatas para la revolución. Estas ideas son defendidas en estos momentos por muchos dirigentes del PSUV y la JPSUV. El propio presidente Chávez, al mismo tiempo que insistía en que el socialismo es innegociable y se comprometía con el pueblo a reducir la pobreza a cero y garantizar vivienda a todos los venezolanos en 2019, se hacía eco de esta presión en varios discursos y entrevistas, llamando a la unidad nacional y prometiendo respetar las propiedades de los grandes grupos empresariales.

Pero los objetivos de pobreza cero, pleno empleo, y una vida digna para los casi treinta millones de venezolanos son incompatibles con el mantenimiento de la propiedad de los principales bancos y empresas en manos de los oligarcas. El presidente Chávez tendrá que elegir entre nacionalizar los medios de producción poniendo el estado y la economía bajo la gestión directa de la clase obrera y los oprimidos (única manera de garantizar la planificación democrática de la economía y resolver los problemas) o, si no se da este paso, incumplir sus promesas, no resolver los problemas existentes y que el descontento siga aumentando.

El peligro de una victoria contrarrevolucionaria no ha desaparecido. La oposición seguirá con su estrategia de aprovechar las fallas, incumplimientos y burocratismo que existen dentro del Estado venezolano para intentar minar la moral de las masas. Dentro de las filas bolivarianas existen sectores burocráticos y reformistas que desde hace años apuestan a la reconciliación y la negociación. Durante la campaña algunos dirigentes opositores, oliendo la derrota, rompieron con Capriles y pidieron el voto a Chávez. Ahora estos oportunistas podrían postularse como candidatos a construir esa derecha dialogante, una especie de partido-puente para ensayar algún tipo de negociación y pacto para frenar la revolución con los sectores más a la derecha del movimiento bolivariano.

Las bases del PSUV y de la JPSUV y del conjunto del movimiento bolivariano (UNETE, CSBT...) debemos organizarnos en torno a un programa genuinamente socialista y construir una corriente marxista revolucionaria que luche por acabar con el poder de los capitalistas y burócratas y dar los pasos decisivos que permitan construir y hacer realidad el socialismo.

La dimisión de Esperanza Aguirre y las tensiones

Antonio García Sinde

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó de forma inesperada su dimisión y anunció su inmediata retirada de la escena política. A pesar de que conserva todavía la Presidencia del PP de Madrid, los acontecimientos de los días siguientes, especialmente la composición del nuevo gobierno autonómico del que salen los aguirristas más destacados, parecen indicar que, al menos de momento, los madrileños perderán de vista a una de las más odiadas representantes políticas de la derecha.

Esperanza Aguirre no se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid ganando unas elecciones, sino gracias a la oscura maniobra conocida como *tamayazo*. Las elecciones autonómicas de 2003 fueron ganadas por la izquierda, que se disponía a gobernar con un acuerdo PSOE-IU cuando, en la sesión de investidura del 10 de junio, los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y M^a Teresa Sáez se abstuvieron en la votación del candidato socialista, impidiendo su nombramiento como presidente, y provocando un parálisis de la Asamblea Regional que llevó a la convocatoria de nuevas elecciones.

En los días posteriores a este incidente se supo que los dos diputados traidores habían sido comprados por un grupo de constructores y promotores inmobiliarios, interesados en conseguir que Aguirre dirigiese la Comunidad de Madrid. El consiguiente escándalo destapó que no sólo el PP estaba estrechamente vinculado a la especulación inmobiliaria —lo cual no sorprendió a nadie— sino que también el PSOE había sido ampliamente penetrado por redes corruptas, gracias a las cuales había sido posible com-



prar a dos de sus diputados. El prestigio del PSOE quedó gravemente dañado, y en las nuevas elecciones sufrió una importante derrota. A partir de ese momento, Aguirre manejó con mano de hierro tanto la Comunidad como el PP de Madrid, y fue elevando sus aspiraciones hasta poner sus ojos en la Presidencia del Gobierno y desafiar cada día con más osadía a Mariano Rajoy.

¿Motivos personales?

La explicación oficial proporcionada por Esperanza Aguirre, y repetida exhaustivamente por el aparato del PP, es que se retira por "motivos personales", haciendo alusión a su reciente enfermedad y otras circunstancias familiares. Pero esta explicación pareció increíble e inmediatamente los medios de comunicación se lanzaron a buscar las verdaderas causas. La opinión más generalizada es que su desencadenante fue un enfrentamiento por la ubicación de Eurovegas, el gran centro de juego (y de prostitución, dro-

gas y blanqueo de dinero) que el empresario estadounidense Sheldon Adelson planea construir en Madrid. Propietarios de terrenos en Alcorcón y Getafe, muy vinculados al PP, se habrían enfrentado a muerte por conseguir que sus respectivos solares fuesen los elegidos. La apuesta de Aguirre por la ubicación en Alcorcón, que fue saludada por los inversores con una subida del 33% en la cotización bursátil de Metrovacesa (propietaria de los solares de Alcorcón) habría desencadenado una reacción hostil del otro clan empresarial, que habría presionado a Rajoy para conseguir la liquidación política de Aguirre.

Sea cual sea el desencadenante inmediato, la realidad es que el enfrentamiento entre Aguirre y el aparato estatal del PP se había profundizado en los últimos meses. Este enfrentamiento no sólo se nutría del choque de ambiciones personales de Rajoy y Aguirre, sino que expresaba un enfrentamiento político de mucha mayor trascendencia. Aguirre era la última gran represen-

tante del sector ultraderechista del PP que conservaba una posición política de relevancia. Desde su fundación por parte de un grupo de exministros de Franco, el PP había conseguido agrupar al electorado más próximo al fascismo, y en gran medida este hecho explica por qué en el Estado español no han despegado formaciones similares al Frente Nacional francés. Pero en su viaje hacia el "centro", Rajoy se deshizo de los dirigentes que, como Mayor Oreja, Vidal-Quadras, María San Gil, e incluso el propio Aznar, asustaban a un amplio sector del electorado por sus posiciones ultraderechistas. Ya sólo Esperanza Aguirre mantenía activa la oposición interna a Rajoy.

El ultraderechismo de Aguirre no se limitaba al debate interno del PP, sino que su gestión en el Gobierno de Madrid estuvo marcada por la aplicación de las propuestas más reaccionarias. En Educación, favoreció con descaro a la enseñanza privada, especialmente a los grupos católicos más fanáticos, como los Legionarios de Cristo; convirtió Telemadrid en la tribuna de la más extrema reacción; hundió los servicios públicos, especialmente la Sanidad, para favorecer las privatizaciones en interés de grandes empresas multinacionales como Capió; estimuló la especulación inmobiliaria poniendo a su servicio la ampliación de la red de Metro; y se convirtió en la punta de lanza de un ataque feroz a los sindicatos y, en general, a las libertades democráticas.

Esta política despertó el entusiasmo del sector más duro del empresariado. Aguirre encontró un firme apoyo en la patronal madrileña CEIM y en su presidente, Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y representante del sector más parasitario de la burguesía española, el sector que, como una sanguijuela, vive a costa de los contratos y presupuestos públicos. Con este apoyo em-

El reparto del trabajo y los métodos de la democracia obrera en Villaverde del Río (Sevilla)

Santiago Jiménez
Alcalde de Villaverde del Río (IU)

Durante todos estos años, el clientelismo y el enchufismo más descarado han sido las notas predominantes en materia de contratación en los ayuntamientos. Estas prácticas se han desarrollado con total impunidad, con la complicidad de las oficinas de empleo, y sin que el sistema legal, supuesto garante del estado de derecho, haya puesto freno a semejantes manejos. En los tiempos de bonanza, muchas alcaldías se han sostenido sobre una política que reduce a los trabajadores a la condición de mercancía. Pero la crisis capitalista y el desempleo masivo han propiciado que miles de familias trabajadoras reclamen igualdad de trato en las contrataciones municipales, dejando en evidencia las políticas clientelares y provocando, en el plano electoral, la caída de la mayoría de los gobiernos que mantenían estos abusos.

La participación de los trabajadores a través de la política asamblearia

El programa político con el que IU de Villaverde nos presentamos a las elecciones planteaba expresamente la cuestión fundamental del reparto democrático del trabajo. Contra el sistema caciquil implantado por la coalición PP-PSOE en el gobierno, nosotros reivindicamos la democracia asamblearia, donde vecinos y trabajadores pueden organizarse en asambleas convocadas



Asamblea para abordar el reparto de las peonadas

con un orden del día, debatir ordenadamente los temas que les afectan y tomar decisiones sobre la política a seguir en el Ayuntamiento, unas decisiones vinculantes para el gobierno de IU que actúa, nunca mejor dicho, en calidad de representante del pueblo.

Desde que asumimos la alcaldía de Villaverde no hay tema de la vida local que no hayamos abordado con estos métodos de democracia directa. Así ocurre con las obras y proyectos públicos, los servicios municipales, el derecho a la vivienda e incluso el reparto de alimentos de la Cruz

Roja, organizado con la intervención directa de los beneficiarios que controlan el reparto equitativo de los alimentos, reforzando los lazos de solidaridad entre ellos y combatiendo la imagen de que están recibiendo limosnas. Pero sin duda, donde la política asamblearia está alcanzando una mayor profundidad y extensión es en el tema del empleo.

El reparto del trabajo

No es exagerado decir que en este momento, el ayuntamiento de Villaverde del Río

es el principal promotor de empleo de la localidad. Mientras las empresas privadas despiden, desaparecen y reducen salarios, el ayuntamiento ha incrementado su plantilla en más de 50 trabajadores, muchos de ellos provenientes de la recuperación de servicios que estaban privatizados, como la Ley de la Dependencia. La política de empleo se apoya en la defensa de los derechos y servicios públicos y la distribución de los contratos de manera democrática y transparente, es decir, con la participación y el control de los mismos trabajadores y trabajadoras que se presentan a las plazas y programas que ponemos en marcha. Todo el proceso de elaboración de las bolsas de trabajo está dominado por los métodos de la democracia obrera.

Las bases que han de regir la selección y el orden de los trabajadores en la bolsa de trabajo se plantean, se discuten y son finalmente aprobadas en asambleas públicas convocadas con la mayor difusión, con la asistencia de centenares de trabajadores de los sectores y profesiones a los que estén orientados los contratos ofertados. Las asambleas eligen sus propios comités de trabajadores para gestionar directamente las labores de valoración y puntuación de solicitudes, y velar por la mayor transparencia en los trabajos. El papel del ayuntamiento es ofrecer los medios materiales y de asesoramiento a los trabajadores para que puedan llevar a cabo su cometido con garantías.

Las bases son aprobadas por decreto de alcaldía, una vez propuestas por la asamblea de trabajadores, los comités se pro-

en el PP

presarial, Aguirre se convirtió en la portavoz de la derecha más dura del PP. Cada conflicto interno y cada tropiezo del Gobierno se convirtieron en una oportunidad para consolidarse como la alternativa de derecha a Rajoy. Así, Aguirre apoyó a Álvarez Cascos en su conflicto con el PP asturiano que le llevó a dejar el partido y fundar el Foro Asturias Ciudadano. Más recientemente, Aguirre aprovechó la rebaja del grado penitenciario del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga para encabezar una campaña contra el gobierno, utilizando a las "asociaciones de víctimas" como ariete contra Rajoy.

La crisis llega al PP

Estas grietas en el seno del PP demuestran que las tensiones sociales provocadas por la profundidad y duración de la crisis alcanzan también a la clase dominante. La creciente e imparable ola de protesta social está dividiendo a la burguesía entre los que consideran que la "mano dura" es la mejor opción para hacer frente a la resistencia de los trabajadores, y los que consideran que la mejor estrategia es graduar los ajustes y realizar algunas concesiones mínimas que permitan mantener el vínculo con las direcciones sindicales y con los partidos reformistas, de forma que la protesta social se mantenga en unos límites aceptables.

Como portavoz del sector duro de la burguesía española, Esperanza Aguirre se había convertido en un serio dolor de cabeza para el Gobierno. A pesar de la intensidad de sus recortes, Rajoy intenta mantener una posición apaciguadora, al menos hasta que hayan pasado los procesos electorales de Galicia, Euskadi y

Cataluña. La actitud incendiaria de Aguirre, sus intentos de eliminar a los sindicatos en el ámbito de la Administración Autonómica, su abierto desprecio hacia los dirigentes del PSOE, sus demagógicas declaraciones a favor de un retorno a un Estado centralizado, obstaculizaban conscientemente los inestables equilibrios que intentaba construir Rajoy y, en consecuencia, el choque frontal era inevitable.

De momento, Rajoy ha ganado la partida. Pero la falta de resultados de su política económica, las incertidumbres que rodean el plan de rescate y la situación del sistema financiero, la súbita agudización de la cuestión nacional en Cataluña y, muy especialmente, la radicalización y extensión de la protesta social indican que es muy posible que su victoria sea efímera. La reciente victoria de los trabajadores portugueses, que mediante la movilización han obligado a retirar la propuesta gubernamental de transferir a los empresarios el 7% de la masa salarial, demuestran que si la lucha es sostenida y masiva es posible vencer. Más pronto que tarde la convocatoria de una nueva huelga general, esta vez en un ambiente social mucho más polarizado, es inevitable. El sector duro del PP, momentáneamente descabezado, volverá a reagruparse y buscará un nuevo líder capaz de presentarse como alternativa a Rajoy. La descomposición del PP no ha hecho más que empezar, y si las fuerzas de la izquierda, especialmente Izquierda Unida, armadas con un programa político capaz de dar respuesta a la crisis del capitalismo, se colocaran inequívocamente al frente de la movilización social, podríamos propinar al PP y a la burguesía un golpe mortal.

nuncian en actas firmadas y el Pleno de la corporación aprueba el listado y las baremaciones finales de la bolsa. Si bien la democracia formal y la legalidad vigente con sus secretarios, tribunales e inspectores, los mismos que no han movido un dedo para impedir la farsa del sistema de contrataciones en los ayuntamientos, no desaparece por la acción de una política revolucionaria desarrollada en un solo ayuntamiento, sí se encuentra subordinada a la verdadera democracia, la democracia obrera, donde la participación organizada de los trabajadores es la única garantía de transparencia e igualdad. Es una situación que responde a una determinada correlación de fuerzas. De hecho, todo este proceso se realiza evitando entrar en conflicto con la normativa y legalidad existente sobre ofertas públicas de empleo. No queremos facilitar la tarea de iniciar acciones legales contra el ayuntamiento. La democracia burguesa, mientras exista el capitalismo, no desaparece con ser obviada, pero, en cualquier caso, nuestra experiencia es una prueba indiscutible de la posibilidad de defender una política revolucionaria incluso dentro las instituciones burguesas.

Un paso más, el control obrero de la producción

Con estos métodos, existen en el ayuntamiento de Villaverde once bolsas de trabajo en funcionamiento bajo la supervisión de comités y asambleas de jardineros, albañiles, limpiadoras, fontaneros, auxiliares administrativos, etc. Las trabajadoras de atención a la Ley de la Dependencia representan un paso más en la democracia que defen-

demos. La municipalización del servicio ha supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos y cobrar todos los meses puntualmente. Después de pagar a las trabajadoras y los gastos del servicio, aún nos está quedando un fondo, que en otro tiempo eran los beneficios empresariales, que vamos a dedicar a ¡una paga de beneficio repartida entre las cuarenta y dos trabajadoras! En plena ofensiva del gobierno para privar a los trabajadores públicos de sus derechos salariales, nosotros aprobamos una paga extra más. Estos son estímulos muy claros y contundentes para la comprensión de los trabajadores de las ventajas de la iniciativa pública y de la política asamblearia. En este escenario, y conscientes de la necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad económica del mismo, las trabajadoras han constituido comités de formación y de calidad, para impedir la relajación de la plantilla en el desempeño de su trabajo y un comité económico y presupuestario para llevar el control de lo que se ingresa y lo que se gasta. Estos son los principios del control obrero, aceptados y desarrollados con la mayor naturalidad por trabajadoras del sector servicios, demostrando en la práctica la validez de unas políticas perfectamente aplicables al control y dirección de una fábrica por los propios trabajadores, de las tierras agrícolas, como estamos viendo en las ocupación de las tierras de Somonte, o incluso del sistema financiero, de la banca, en manos de los trabajadores para satisfacer las necesidades sociales, y no para especular, engañar y desahuciar a las familias trabajadoras.



X Asamblea Federal de Izquierda Unida

Transformar el avance electoral en organización revolucionaria

Bárbara Areal

El próximo mes de diciembre IU celebrará su X Asamblea Federal en un contexto en el que su respaldo electoral no para de crecer. Si en las pasadas elecciones generales la coalición subió más de 700.000 votos, pasando del 3,77% al 6,92% de los sufragios, la encuesta del CIS publicada en julio le adjudicaba hasta un 8,6%. El espacio para una alternativa de izquierdas sigue ampliándose. No es de extrañar, la dirección del PSOE, a pesar de haber pasado a la oposición hace poco menos de un año, sigue empeñada en una política de aceptación en los hechos de los brutales planes de ajustes impuestos por el gran capital. La rabia entre las familias trabajadoras no deja de crecer, alimentada no sólo por los recortes sino también por las limitaciones de la democracia burguesa, empeñada en probar su compromiso con las grandes fortunas mientras desprecia las necesidades de la mayoría de la población. Es necesario remontarse atrás varias décadas para encontrar un escenario más propicio para el desarrollo de una alternativa anticapitalista.

Rechazar la lógica capitalista en los parlamentos

Este nuevo giro a la izquierda del péndulo de la historia ofrece a IU la oportunidad de convertirse en la dirección del creciente número de jóvenes y trabajadores que empiezan a buscar una salida revolucionaria. El avance en las urnas podría llegar a ser una herramienta en esta tarea, pero no se trata de un proceso automático. Las presiones que ejercen las instituciones de la democracia burguesa pueden llevar a los compañeros parlamentarios a asimilar la lógica del sistema. Contamos ya con dos alarmantes precedentes que deberían ser abordados y corregidos por esta Asamblea. Pedro Escobar, diputado y coordinador regional de IU Extremadura, fundamentó su apoyo a los presupuestos del PP en la Comunidad argumentando que: "Los presupuestos suponen votar entre Guatemala y Guatepeor, pero tenemos que tomar la mejor decisión para los extremeños" (*Europa Press*, 17/01/2012). Meses después, Diego Valderas, coordinador general de IU Andalucía y vicepresidente de la Junta, dirigió una carta a la militancia justificando la asunción de los recortes en el gobierno de coalición con el PSOE con el siguiente razonamiento: "Frente a esta situación, IU podría entregar la llave del Gobierno a la derecha facilitando el despido masivo de funcionarios, el recorte de derechos y privatizaciones a todos los niveles...". En ambos casos la misma conclusión: convencer a la clase obrera que debe resignarse a que le amputen una mano para evitar perder un brazo.

La actuación de estos compañeros poco se parece a la utilización de la tribuna parlamentaria de una organización anticapitalista. Con esta política renuncian a convertir su presen-

cia en las instituciones en un altavoz para rebatir la mentira de que no hay dinero para gastos sociales, exigiendo que la riqueza existente se deje de dilapidar en regalos a empresarios y banqueros. Olvidan también que la labor de una dirección revolucionaria es explicar que no es dentro sino fuera de los parlamentos y a través de la lucha donde se defienden nuestros derechos. Y, en este sentido, se hace inevitable una crítica que, con un método respetuoso, señale con firmeza el fracaso de la política timorata de los dirigentes de CCOO y UGT.

Una alternativa a la política desmovilizadora de la cúpula sindical

Lejos de ello, el documento elaborado para el debate considera que: "Los Sindicatos han activado su papel sociopolítico, recuperan credibilidad, hay conciencia de que el ataque es generalizado, se anuncian nuevas Huelgas Generales, se establecen plataformas conjuntas sindicales como no había desde la transición (en defensa de lo público), confluyen las diversas "mareas" y se generaliza la movilización en sectores que hasta ahora eran distantes a la misma". La realidad dista bastante de este complaciente retrato. Toxo y Méndez no sólo han cruzado las líneas rojas que ellos mismos se marcaron, sino que las huelgas generales convocadas el 29-S y el 29-M tuvieron que ser impuestas desde abajo y carecieron, tras su éxito, de cualquier tipo de continuidad. Por no mencionar su política de dividir y dispersar los conflictos en vez de unificarlos: por un lado los mineros, por otro el sector público, más allá la educación, otro día la sanidad...

Hay decenas de miles, incluso cientos de miles, de activistas, de afiliados a los sindicatos de clase que buscan una alternativa de lucha concreta hoy y ahora. IU tiene una ocasión única para probar la autenticidad de su alternativa a la podrida política oficial pasando de las palabras a los hechos en el terreno sindical. Si una huelga general de 24 horas no ha sido suficiente para tumbar los ataques, demos un paso adelante con la convocatoria de una huelga general de 48 horas en unidad de acción con la clase obrera portuguesa y griega. No faltarán quienes muestren su escepticismo frente a estas propuestas, tachándolas de irrealizables. Para responderles no tenemos más que reflexionar sobre el contexto social en el que se ha producido el segundo aniversario del 29-S. A pesar de la inhibición de los dirigentes sindicales, el pasado sábado 29 de septiembre una marea humana se ha vuelto a reunir en Madrid. Pero, en esta ocasión, se ha cambiado la Puerta del Sol por el Congreso, confluendo además con nuestros compañeros portugueses. La clase obrera ha probado más que de sobra la fuerza que alberga y su decisión a luchar. La cuestión clave es convertirse en una dirección política a la altura de los retos históricos a los que se enfrenta.



Entrevista a Jesús Rocha, concejal de IU y víctima de la represión policial el 25-S

“Los principales responsables son los cargos del PP al mando”

El pasado 25 de septiembre la policía nacional cargó indiscriminadamente en la Estación de Atocha, después de la concentración convocada frente al Congreso de los Diputados. Las imágenes de la represión policial son dantescas. En concreto, la entrada de los antidisturbios en Atocha golpeando a todo aquel que estuviera delante recuerda los peores tiempos de la dictadura franquista. En Atocha se encontraba Jesús Rocha (en la foto), concejal de IU del Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara).

EL MILITANTE.— ¿Cómo discurrió la concentración en la Plaza de Neptuno?

Jesús Rocha.— Como se pudo ver en las imágenes de televisión la manifestación fue tranquila hasta que comenzó a haber cargas de la Policía. A nosotros, que pasábamos por la parte de atrás de la concentración, casi nos aplastan contra la pared. Nosotros no fuimos hacia Atocha, aunque era muy complicado porque había policías que iban por el Paseo del Prado hacia allí y otros que iban en dirección contraria. En ese momento mucha gente corría y era complicado salir de allí. Finalmente llegamos a Atocha y bajamos al andén a esperar el tren para volver a Guadalajara.

EM.— ¿Qué ocurrió en la Estación de Atocha?

JR.— Se empezó a escuchar disparos y comenzó a bajar a los andenes gente corriendo y detrás bajaron los antidisturbios con sus uniformes de Robocop, iban en grupos de seis o siete y junto a ellos iban también los guardias de seguridad, también repartiendo golpes indiscriminadamente. Nosotros estábamos sentados en el banco y de repente un policía me dio un puñetazo en la cara y yo me puse a gritar “vergüenza, vergüenza, vergüenza”, y llegó otro grupo de policías y siguieron golpeándome. En ese momento yo seguía gritando “vergüenza” intentando llamar la atención para que me dejaran de golpear.

El 25-S los antidisturbios estaban descontrolados, evidentemente los principales responsables son los cargos del PP que estaban al mando y que fueron los que decidieron que la policía fuera a saco. Desde luego esta actuación y especialmente el hecho de entrar en la estación de Atocha es algo que no se puede hacer, porque podían haber provocado una desgracia mayor, que alguien se cayera a las vías o incluso que cualquiera que bajara del tren recibiera algún pelotazo. Hay un refrán que dice “de padres gatos, hijos mininos”, muchos cargos del PP son hijos de cargos políticos de la dictadura franquista y evidentemente ciertas actuaciones recuerdan aquellos tiempos.

EM.— ¿Cuál crees que es la manera de luchar contra la represión?

JR.— Yo no sé mucho de estrategia, pero creo que la policía detenga a unos cuantos para intentar frenar el movimiento no va a evitar que la gente siga protestando contra los recortes. La forma de responder no es con más violencia, que lo único que sirve es para dar una justificación al PP para seguir con la represión. En este caso la actuación policial fue una sinrazón y la razón siempre se tiene que imponer.

EM.— ¿Quieres añadir algo más?

JR.— El PP quiere dar la imagen de que con dureza se arreglan las cosas, que es necesario mano firme para acabar con los problemas. Pero, el problema es que estando en 2012, con todos los medios digitales existentes, una actuación como la del 25-S queda grabada. Antes no había testigos de estas actuaciones, pero hoy en día no se puede evitar que estas cosas se graben, que es ya lo que faltaba. Con la política del PP en este sentido vamos a llegar a la situación de la novela de Orwell 1984, en la que hay un control absoluto de la población. El 25-S se repartieron palos a todo el mundo como fue mi caso, estar sentado en un banco fue motivo suficiente para que me golpearan.

Presupuestos Generales del Estado • 2013

La losa de la deuda aplasta los gastos sociales

María Castro

Mientras la sombra del “rescate” planea amenazadoramente sobre la economía española, el gobierno del Partido Popular ha presentado los Presupuestos Generales del Estado más restrictivos y antisociales que se recuerdan. Los presupuestos van en consonancia con los presentados en países como Portugal o Grecia, un requisito necesario para que pudieran acceder al rescate por parte de la UE, aunque en el caso español, la Comisión Europea ha manifestado que “han ido más allá de lo que reclamaba el Ejecutivo comunitario” (*El País*, 30/9/12). Estos recortes se suman a los que ya hemos sufrido los jóvenes y trabajadores desde el inicio de la crisis y que, desgraciadamente, no van a ser los últimos, basta con escuchar al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuando el 4 de octubre pedía “medidas adicionales” para corregir el déficit de este año.

El insostenible coste de la deuda pública

Los nuevos presupuestos han sacado a la luz la enorme losa que representa la deuda pública, no porque el Estado haya tenido que endeudarse para hacer frente a los gastos sociales o al mantenimiento del estado del bienestar. Todo lo contrario, las ayudas a la banca y el fondo de pagos a proveedores son dos de los causantes de que la deuda pública en 2013 vaya a alcanzar el 90,5% del PIB, por encima del 85,3% actual. Así, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), multiplicará su deuda por 5,4 (hasta los 60.528 millones de euros) y el fondo para la financiación de los pagos a proveedores de las Comunidades Autónomas, tendrá una deuda de 27.372 millones de euros.

El problema no es sólo que en 2013 la deuda pública superará los 900.000 millones de euros, sino el coste económico que conlleva el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses. En los presupuestos la partida de la deuda pública alcanza la cifra de 35.589 millones de euros (9.742 millones más que este año), un 33,8% de aumento. El próximo año, uno de

cada tres euros que gaste el gobierno irá destinado a pagar los intereses de dicha deuda.

Un ataque frontal a las condiciones de vida de la clase obrera

La rueda de prensa en la que se presentaron los presupuestos fue una nueva muestra más del cinismo de este gobierno. Las risas, las medias verdades y las mentiras han caracterizado a Mariano Rajoy y sus ministros desde que llegaron al poder. Una vez más hubo que esperar a la publicación del BOE para enterarnos de la magnitud del desastre.

Asistimos al intento burdo de hacernos creer que subirían las pensiones, las becas y los gastos sociales. Pero las cifras mostraron la realidad.

Las becas no sólo no aumentarán sino que se destinarán 50 millones de euros menos; en cuanto al gasto social, que según insistía una y otra vez la vicepresidenta del gobierno representaría el 63,5% de los presupuestos, también había truco, porque no contabilizaron para este cálculo la cantidad destinada a la deuda pública. Si tomamos el conjunto de gastos veremos que los gastos sociales son el 55,96% de los gastos, inferior al 56,2% de este año.

Más paro, menos dinero para los desempleados

Todas las partidas destinadas a gastos sociales sufren duros recortes. El dinero destinado al desempleo cae un 6,3%. Esta reducción incluye la reforma del subsidio de paro, que incluye una disminución de la prestación del 60 al 50% de la base de cotización a partir del sexto mes. En cuanto a la ayuda de 400 euros para los parados de larga duración, en los presupuestos sólo se recoge esta partida hasta el mes de febrero, así que miles de trabajadores a partir del próximo mes de marzo dejarán de recibir este ingreso. También baja un 31% el dinero destinado al Fondo de Garantía Salarial, el organismo que garantiza las indemnizaciones y salarios de empresas insolventes.

El dinero destinado a Educación cae un 14,4%, si sumamos lo que se



El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

ha reducido este año, el gasto en educación ha caído más de un tercio (31%) en dos años. A parte de las becas, la mayor caída la sufre la educación compensatoria, con un 68%, eso significa que muchos alumnos, por uno u otro motivo, serán expulsados del sistema o condenados al fracaso escolar. Cultura sufre otra importante caída, un 22,6%.

Pero la principal víctima de los presupuestos es Sanidad, con un descenso del 22,6%, un presagio de nuevos recortes en derechos sanitarios. Además, resulta criminal que la ayuda a la beneficencia municipal disminuya un 40% en un momento en el que cada vez son más las personas que dependen para comer de comedores municipales o bancos de alimentos.

No todo baja, la Iglesia Católica seguirá manteniendo su aportación, en realidad, aumentará en 3 millones de euros. Hace unos días la organización Europa Laica denunciaba cómo entre ayudas directas e indirectas del Estado, esta institución reaccionaria recibe cada año 11.000 millones de euros, ¡5 veces más que Educación! Los empresarios tampoco salen perjudicados, los presupuestos contemplan conceder 38.986 millones de euros en beneficios fiscales, una parte importante en exenciones de IVA, aproximadamente 16.000 millones. Como se puede ver, los nuevos presupuestos continúan en la línea de atacar los derechos y conquistas sociales, beneficiando a una minoría y condenando a más miseria, paro y precariedad a la inmensa mayoría de jóvenes y trabajadores.

A propósito del fraude fiscal

Gloria Carneiro

Los Técnicos de Hacienda han elaborado recientemente un interesante informe. En éste, aparte de resaltar que el 23,3% de la economía de nuestro país se encuentra sumergida (lo que equivale a 245.000 millones de euros anuales), cifran en 60.000 millones la evasión fiscal que se produce cada año. De esa cifra, unos 42.700 millones (el 72%) corresponde a grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas. Las pymes (que representan junto a los autónomos el 97% del tejido empresarial) generan el

17% del fraude fiscal, y los apaleados autónomos (tertulianos y gobierno responsabilizan a este colectivo del fraude fiscal), que agrupan a tres millones de trabajadores por cuenta propia, concentran únicamente el 8,6%.

Los técnicos de Hacienda denuncian que en lugar de perseguirse las grandes bolsas de fraude (concentradas en el mundo empresarial y financiero) la lupa se pone en las rentas de trabajo, autónomos y microempresas. La realidad es cristalina: el 82% de las empresas que cotizan en el Ibx 35 tienen presencia directa o filiales en paraísos fiscales. “Mien-

tras las inversiones de las empresas del Ibx 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso (en 2010 ha sido el doble que en 2009), la recaudación por el Impuesto de Sociedades se desplomó un 55% entre 2007 y 2009”. De la progresividad del impuesto de Sociedades (es decir, el que deben pagar los capitalistas) habla también el informe. Lejos del 30% general, y según los mismos datos, a medida que va creciendo la compañía, menos paga; así, una pyme tributa al 23% frente al 20% de la gran empresa y el 14,5% de los grupos consolidados.

21 DE OCTUBRE Elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)

Por una alternativa de izquierdas contra los recortes, en defensa del derecho de autodeterminación y por el socialismo

Eloy Val del Olmo

La convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad Autónoma Vasca del próximo 21 de octubre se produce en el marco de un proceso de movilizaciones masivas para frenar la batería de ataques del Gobierno de Rajoy. A la huelga general del pasado 26 de septiembre organizada por la mayoría sindical vasca, se unen las movilizaciones estudiantiles del 11, 16, 17 y 18 de octubre, y la perspectiva de una huelga general el 14 de noviembre en el Estado español y Portugal.

Aquí hay crisis, hay paro y hay recortes

Aunque desde el gobierno vasco se ha intentado presentar una situación económica en Euskal Herria diferente a la del Estado, aquí también hay crisis, cierres de empresas, desempleo creciente y recortes sociales. Las exportaciones del sector industrial, donde reside el músculo de la economía vasca, están descendiendo de forma muy significativa después de la caída de la economía francesa que está al borde de entrar en recesión, y de la desaceleración de la economía alemana y estadounidense. Los cierres de empresa están volviendo a apretar, igual que el número de EREs y despidos en el sector industrial impulsados por Confesbask (la patronal vasca) que aplica a fondo la reforma laboral y exige con arrogancia que el próximo Gobierno vasco, “sea el que sea”, “ajuste los gastos a los ingresos”. Es decir, que traducido al lenguaje común, se meta la tijera y se profundice en una política de recortes del gasto social y trasvase de plusvalía desde los bolsillos de la clase obrera al de los capitalistas.

Mientras tanto, el panorama es cada vez peor para miles de familias trabajadoras: empobrecimiento, crecimiento de la inflación y una tasa de desempleo que alcanzó el 14% en el último año. Los recortes en sanidad y educación y la reducción de las prestaciones sociales del Gobierno de Patxi López han sido una realidad palpable, a pesar de las cabriolas dialécticas de los dirigentes del PSE para negarlos. Esta implicación de los dirigentes del PSOE en la política de recortes cuando llegan a los gobiernos, sea estatal o autonómicos, su actitud tendiendo la mano al PP en aspectos esenciales y vacilando a la hora de prestar su apoyo a la movilización social, está detrás de sus malas expectativas electorales. Respecto a Izquierda



Manifestación en Pamplona durante la huelga general del pasado 26 de septiembre

Unida, la escisión entre los partidarios de Madrazo y los que apoyan a la dirección federal, sumado a la potencia de la Izquierda Abertzale, reduce las posibilidades de que IU tenga representación en el parlamento vasco.

La derecha es la derecha, se vista con la bandera española o con otras

La prensa capitalista, la patronal, la gente de “orden”, buscan desesperadamente que el PNV recupere el poder y haga el trabajo que el PP realiza en el Estado español. Es evidente que la burguesía necesita un gobierno fuerte, o menos débil que el anterior, como el mejor instrumento para defender sus intereses de clase en una época de crisis aguda del sistema y enconamiento de la lucha de clases. Incluso hay sectores del PSOE que no verían con malos ojos apoyar al PNV y arrimar el hombro para impedir un gobierno de la Izquierda Abertzale.

Los dirigentes peneuvistas han moderado su discurso independentista de la época de Ibarretxe, y postulan la necesidad de un gran acuerdo nacional para salir de la crisis (sin hacer ningún asco en apoyar al PP en cuestiones esenciales y recibir el apoyo de éste cuando lo necesitan). Durante meses el PNV ha agitado sobre el peligro de una “quebra inminente” de las finanzas vascas para justificar que, si llega al Gobierno, llevará a cabo una política de recortes salvajes al estilo de CiU con la excusa de la “herencia” recibida del anterior gobierno.

Por su parte, el Partido Popular está utilizando en la campaña electoral vasca su discurso más reaccionario y xenofóbico: Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz y candidato al parlamento, afirma que “hay muchas personas de otros países que vienen a vivir de la sopa boba y además a hurtar y a robar”, mientras el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, acusa al nacionalismo vasco y catalán de estar al “unísono”, con “una vanguardia en la ruptura, que es ETA”. Siguiendo un guión más que gastado, PP y PNV, la burguesía española y vasca, azuzan conscientemente, una vez más, el debate en líneas nacio-

nales para tapar su política de recortes sociales que ha sacado a decenas de miles de trabajadores y jóvenes a las calles.

Ascenso de la izquierda abertzale

La Izquierda Abertzale (IA), que no pudo presentarse a las pasadas elecciones autonómicas al estar ilegalizada, vuelve al parlamento vasco en coalición con Aralar, Alternativa y EA bajo las siglas de EH-Bildu. La fuerza de la izquierda abertzale ya se puso de manifiesto en las municipales de mayo de 2011, donde obtuvieron más de mil concejales, y en las generales del pasado noviembre cuando lograron siete actas de diputados. Pero este apoyo no ha hecho más que acrecentarse, como se ha podido observar el pasado 26S durante la sexta huelga general convocada en Euskal Herria desde mayo del 2009, y especialmente en los mítines al finalizar las manifestaciones multitudinarias que recorrieron las capitales de los cuatro herrialdes (Araba, Bizkaia, Guipúzcoa y Nafarroa). La presencia de EH-Bildu fue muy destacada: Laura Mintegi, Garitano, junto a centenares de concejales y militantes, estuvieron en las calles mientras los diputados de Amaiur se unían en Madrid a quienes rodeaban el parlamento.

La Izquierda Abertzale está canalizando el voto de descontento y las esperanzas de decenas de miles de trabajadores y jóvenes que buscan una alternativa por la izquierda, contra los recortes, contra la crisis y el desempleo, por el derecho de autodeterminación y por cambiar de raíz la sociedad. El programa de EH-Bildu enfatiza la lucha contra el paro como prioridad, apostando por la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, un salario mínimo interprofesional de 1.075 euros, la disminución de la edad de jubilación para repartir el empleo, entre otras medidas, que son muy positivas. Sin embargo, un programa semejante solo puede ser puesto en práctica si se liga a la movilización y al control de las principales palancas de la economía; sólo a través de la nacionalización de la banca y de los grandes monopolios, sin indemnización y bajo el control de la clase trabajadora y sus organizaciones, se puede planificar democráticamente la economía en beneficio de la gran mayoría de la sociedad.

Estas elecciones van a probar la fortaleza de la Izquierda Abertzale, sus raíces entre la juventud, entre el movimiento obrero

y entre sectores de las capas medias, todos ellos duramente golpeados por la crisis. Pero este gran avance también presenta riesgos que es necesario tener en cuenta. La defensa de los derechos democrático nacionales de Euskal Herria están inseparablemente unidos a la lucha contra el capitalismo, por una alternativa socialista que defienda los intereses de la mayoría de la clase obrera. En este combate, la burguesía vasca no es ninguna aliada confiable de la Izquierda Abertzale, de los cientos de miles que apoyarán en las urnas a Bildu y participan en las movilizaciones activamente. Todo lo contrario. La burguesía vasca, fusionada en los aspectos esenciales a la burguesía española en la defensa de sus intereses de clase, es una enemiga declarada de la causa de Euskal Herria.

Un programa de clase, socialista e internacionalista

Es necesario que la dirección de la IA rompa con cualquier estrategia de pactos y acuerdos con la burguesía vasca. La idea de que conformando un bloque nacional se estaría en mejores condiciones para alcanzar el derecho de autodeterminación ha sido desmentida por la experiencia. La burguesía vasca y sus representantes políticos, sean del PNV o EA, han dado muestras sobradas de su incapacidad para luchar consecuentemente por los derechos democráticos nacionales de Euskal Herria. Cuando han gobernado no han dudado en utilizar la represión contra aquellos que luchaban por estos derechos, además de beneficiar con sus leyes y medidas a los más ricos. El hecho de que EA se sume ahora a la IA en sus iniciativas, no debe engañar a nadie. Su debilidad electoral les lleva a aceptar de manera demagógica estas posiciones, con el afán de conducir a la Izquierda Abertzale hacia el institucionalismo burgués, obstaculizar la defensa de un programa auténticamente socialista y revolucionario y sobrevivir políticamente. Pero la Izquierda Abertzale no necesita estos compañeros de viaje: tiene la fuerza suficiente y el apoyo social necesario entre la clase trabajadora y la juventud, para fortalecerse como una alternativa de izquierdas que conecte con las aspiraciones de los oprimidos. La experiencia de Irlanda es clara al respecto: los pactos con la burguesía y la aceptación de la lógica del capitalismo, sólo sirven para generar frustración y fortalecen a nuestros enemigos.

El próximo 21 de octubre, cientos de miles de jóvenes y trabajadores vascos que han sido protagonistas de las grandes huelgas generales organizadas en Euskal Herria, de las movilizaciones masivas en defensa de los derechos democrático nacionales, van a votar por EH-Bildu. Un voto que respalda el papel decisivo de la IA en el fin de la actividad armada de ETA, pero que también reclama una política alternativa, revolucionaria, la misma que miles de personas han reivindicado en cada una de las huelgas generales de Euskal Herria y en cada una de las grandes movilizaciones del 15-M. Los marxistas de EL MILITANTE en Euskal Herria participamos de este gran movimiento que se mueve por la transformación de la sociedad. ¡Que cada uno de esos votos sirva para fortalecer la lucha contra el capitalismo, el verdadero responsable de la opresión social y nacional!



Declaración de EL MILITANTE

Desde la manifestación de la Diada en Barcelona, el pasado 11 de septiembre, la cuestión nacional catalana ha vuelto a situarse en el primer plano de la política en todo el Estado, quizás como nunca lo había hecho antes desde la caída de la dictadura franquista. Se trata de un aspecto de vital importancia para la clase trabajadora catalana y del resto del Estado, y no es ninguna casualidad que la agudización del problema nacional en el Estado español se produzca en un contexto de grave crisis económica y de profundo malestar social.

La reacción españolista

Hay varios factores que han confluído para dar un carácter tan masivo a la manifestación del Onze de Setembre. Por supuesto, el rechazo a la crisis económica, el desempleo, la incertidumbre social o el empobrecimiento de sectores de las capas medias duramente golpeadas por la crisis, han sido factores relevantes. Junto a estos, el efecto acumulativo de la campaña reaccionaria de la derecha españolista contra los derechos democráticos y los sentimientos nacionales de una clara mayoría del pueblo catalán, particularmente desde la segunda legislatura de Aznar y la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, ha jugado también un papel muy activo.

Citando algunos ejemplos muy recientes de esta campaña, a finales de agosto el coronel Francisco Alamán decía en una entrevista: “¿La independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver y el de muchos. Los militares hicimos un juramento sagrado: cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable”. Pero su advertencia no se quedaba ahí: “Aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”.

Estas declaraciones, que tuvieron un gran impacto en Catalunya, no son una anécdota: muestran el estado de ánimo de amplios sectores del aparato del Estado, impregnados hasta la médula del nacionalismo español más rancio, exacerbado por el contexto de polarización e inestabilidad política creciente*. Obviamente, ni el gobierno del PP, ni la justicia, han adoptado ninguna sanción, ni abierto ninguna causa judicial contra este militar y sus manifestaciones golpistas. Eso lo dejan para las manifestaciones de protesta contra los recortes sociales.

En la víspera de la Diada, Rajoy también calentó el ambiente al decir que “España no está para algarabías y líos”. Días y semanas después las andanadas reaccionarias de la derecha españolista continuaron: Aleix Vidal-Quadras, eurodiputado del PP y portavoz de este partido en Catalunya, apeló a la intervención de la Guardia Civil en Catalunya; Rosa Díez, diputada de UPyD, sugirió la supresión de la Generalitat; el ministro de Educación, Wert, vinculó el aumento del sentimiento independentista al sistema educativo catalán, llegando a afirmar que hay que “españolizar a los alumnos catalanes” y el mismo Juan Carlos I, en su conocida “cibercarta”, aludió a ese sentimiento como una “quimera”.

La arrogancia y la prepotencia de la burguesía españolista siempre han actuado como un poderoso acicate movilizador en Catalunya, una nacionalidad histórica con fuertes sentimientos de comunidad, lengua y tradiciones culturales, y donde la dictadura franquista reprimió ferozmente cualquier tipo de manifestación en defensa de los derechos democráticos nacionales catalanes.

Este hecho, objetivo, no ha impedido a la burguesía nacionalista catalana, a CiU, colaborar activamente con la burguesía española y con el PP en todo lo que afectara a sus intereses de clase, exactamente igual que ha hecho la burguesía vasca y su partido, el PNV. La “defensa” de CiU de los derechos democráticos nacionales de Catalunya siem-

pre ha perseguido un objetivo: fortalecer su poder político y su poder económico, aumentar su red clientelar de apoyos, y beneficiar los negocios de los capitalistas catalanes. El pueblo de Catalunya, los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los inmigrantes, han sido sólo el objeto del saqueo económico de estos burgueses, por muy nacionalistas que se presenten a sí mismos.

La demagogia de CiU: apoyando al PP contra los trabajadores y apropiándose de las aspiraciones democráticas para ocultar sus responsabilidades

Para explicar los movimientos tácticos de los representantes políticos de la burguesía catalana hay que partir de cual fue su política desde la llegada a la Generalitat de CiU, en noviembre de 2010, y qué respuesta social y qué efectos políticos ha tenido.

Un año antes de que el PP hiciera lo propio desde el gobierno central, el gobierno de CiU se lanzó, desde el primer minuto de legislatura, a una ofensiva brutal contra la sanidad y educación pública. La Generalitat en manos de Mas fue pionera en cerrar quirófanos y centros de salud y aplicar el copago sanitario. El gobierno de CiU utilizó la represión como pocas veces se había visto en los últimos años: brutal desalojo por parte de los Mossos d'Esquadra de plaça Catalunya durante el movimiento 15-M; salvaje carga contra la manifestación de la huelga general del 29-M (la jornada de huelga acabó con 74 detenciones en toda Catalunya); sistemática infiltración policial para organizar altercados que justifiquen la represión. En el plano ideológico, al igual que el PP, CiU desarrolló una intensa campaña de criminalización contra las manifestaciones y grupos de izquierda. Toda la parafernalia reaccionaria actual del PP contra las recientes manifestaciones del 25-S cerca del Congreso, es calcada a la que escenificó CiU a raíz de las concentraciones ante el Parlament, en la primavera de 2011. La derecha catalana es uno de los más vehementes partidarios de la restricción del derecho a huelga y manifestación, y lo defienden siempre que tienen su oportunidad.

Para justificar los recortes, CiU hizo una utilización a fondo de toda la demagogia liberal clásica contra el llamado estado del bienestar. Basta recordar las palabras de Boí Ruiz, conseller de Sanidad, que afirmaba, hace justamente un año, que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado” y que “no hay un derecho a la salud, porque ésta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos, que es lo que sería el ecosistema de la persona”, por lo tanto, según este liberal recalcitrante, “el usuario debe tener la responsabilidad moral de que cuando no trata bien a su salud la tenemos que pagar entre todos”. Al igual que la dimitida Esperanza Aguirre en Madrid, Mas-Colell, conseller de Economía, otro acérrimo liberal, proclamó que era necesario poner fin al “acceso gratuito universal” a las prestaciones sociales.

CiU situó al PP como su socio principal en el Parlament, estableciendo una relación política que nunca se había producido de forma tan descarada en Catalunya, justamente donde los “populares” tienen un perfil más marcadamente cavernícola y españolista. Tras las elecciones municipales, en mayo de 2011, esta alianza se reforzó con el apoyo del PP a CiU para que alcanzara la alcaldía de Barcelona y el apoyo de CiU al PP para que éste se hiciera con la alcaldía de Badalona, encabezada por un racista declarado. La colaboración se fortaleció aún más con la llegada al gobierno de Rajoy, tras las elecciones de noviembre de 2011; CiU ha apoyado en el congreso, por convicción propia y en compensación por el papel del PP en Catalunya, todas sus medidas antiobreras: la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de estabilidad presupuestaria, los recortes en sanidad y educación. Las únicas

La cuestión nacional en**¡Unidad de la clase
políticas reaccionaria****¡En defensa de un pr
de clase, interna****¡Por el der
para Catal**

Manifestación de la Diada, el pasado 11 de septiembre en Barcelona

críticas de CiU a la política del PP han sido para que este endurezca aún más sus medidas, así fue con la reforma laboral o con el recorte salarial de los funcionarios.

Catalunya ha sido precisamente uno de los territorios de todo el Estado donde la movilización de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y la represión ha sido más masiva y continuada. Desde las manifestaciones multitudinarias contra los recortes en sanidad, las grandes movilizaciones del 15-M, o el seguimiento masivo de la huelga general del 29-M de 2012, la huelga educativa del 22 de mayo de 2012, los ejemplos son abundantes. Aunque lógicamente los medios no lo destacaron, en Barcelona se produjo una manifestación histórica el 29-M, de un millón de personas, a lo que hay que sumar otras decenas de miles más en otras ciudades catalanas. CiU no ha tenido tregua desde el mismo momento en que llegó a Generalitat y empezó con su política de ataques.

Ante un rechazo social tan amplio a su política y teniendo en cuenta la necesidad de la burguesía catalana de emprender nuevos y más duros ataques, CiU necesitaba una maniobra audaz con la que desviar la atención de su política social y de su bochornoso idilio con el PP. También las encuestas ponían de manifiesto una caída clara en la intención de voto a CiU. La mejor manera de afrontar la coyuntura inmediata era involucrar en la señera, abanderar la lucha por un “Estado propio” y convocar elecciones anticipadas.

**Los objetivos de Mas y la
banarrota de los dirigentes
reformistas de la izquierda**

De cara a la manifestación del pasado Onze de Setembre (una marcha de toda Catalun-

ya a Barcelona) CiU empleó a fondo toda su maquinaria para impulsarla y capitalizarla políticamente. Utilizó la administración, los medios de comunicación y sus posiciones en la Asamblea Nacional de Catalunya (convocantes formales), aprovechándose para sus propios fines de los sentimientos democráticos-nacionales de un segmento importante de la sociedad catalana, de la frustración de amplios sectores de las capas medias por el callejón sin salida que está significando esta crisis y de la incapacidad de los dirigentes de la izquierda de ofrecer una alternativa al capitalismo y de sostener una posición de independencia de clase en la cuestión nacional.

Pero, ¿qué objetivos persigue CiU y hasta dónde está dispuesta a llegar en su giro “independentista”? El primero de ellos es desviar la enorme crítica social a su política de recortes y tratar de bloquear la contestación de la clase obrera y la juventud, utilizando el hecho nacional. El segundo, reforzarse en la pugna que mantiene con el gobierno central para hacerse con una mayor porción de la tarta presupuestaria; por supuesto que cualquier concesión a CiU por parte del PP, y no se puede descartar que esto se produzca, sería utilizada en beneficio de los grandes empresarios catalanes y no de la mayoría de la población catalana.

Hay que señalar que el éxito relativo de CiU con esta maniobra, hasta el momento, se debe a un factor fundamental: la total bancarrota política de la izquierda reformista, tanto en el plano político como en el sindical. La propia victoria electoral de CiU, en noviembre de 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit, con el PSC a la cabeza, tras siete años en la Generalitat.

Catalunya se recrudece

La clase obrera contra las políticas de las derechas del PP y de CiU!

Programa de independencia nacionalista y socialista!

Derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza!



Manifestación durante la huelga general del 29 de marzo en Barcelona

En 2003 se había producido un espectacular giro electoral a la izquierda en Catalunya, que puso fin a 22 años de gobierno de CiU y anticipó la caída de Aznar al año siguiente. Sin embargo, en vez de basarse en ese apoyo masivo para impulsar un cambio radical en la política social y en la defensa de los derechos democráticos, se adoptó una política continuista que en poco se diferenciaba a la aplicada por la derecha: privatización de los servicios públicos, aceptación de los despidos de las multinacionales mientras estas seguían recibiendo subvenciones públicas a mansalva, uso de la represión contra el movimiento estudiantil, etc. Una de las medidas centrales del Tripartit fue la aprobación de la Ley de Educación Catalana (LEC), un verdadero manual de privatización de la educación pública, que contó con el respaldo entusiasta de la patronal y de CiU, y la oposición de la comunidad educativa, que protagonizó cuatro huelgas generales exitosas. Cuando el gobierno Zapatero anunció el recorte salarial del 5% a los empleados públicos, el Tripartit se apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en Catalunya a unas 260 empresas públicas o semipúblicas.

Con la subida de CiU a la Generalitat, los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de boquilla a los recortes, le han tendido la mano constantemente, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal. Este punto es muy importante porque durante dos años CiU ha agitado con diferente volumen, pero de forma constante, la cuestión del déficit fiscal (la diferencia entre lo que Catalunya aporta en recaudación de impuestos y lo que recibe de la caja común) utilizándolo

como justificación de la dureza de los recortes sociales en Catalunya. Vergonzosamente, toda la izquierda ha bailado al ritmo marcado por CiU y la patronal, desde el PSC hasta ICV pasando por los sindicatos. Los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya, en lugar de apoyarse en el altísimo grado de participación que ya estaban alcanzando las protestas en todos los sectores, unificándolas y trazando una estrategia de ofensiva contra CiU, mantuvieron la misma táctica desmovilizadora que en el resto del Estado. Había condiciones clarísimas para dar continuidad a la huelga general del 29-M de 2012 en todo el Estado, pero en Catalunya estas condiciones eran todavía más favorables, si cabe. Nada de eso se hizo, y esa postura allanó el camino a la maniobra de Artur Mas, contribuyendo a crear ilusiones de que con un nuevo acuerdo de financiación para Catalunya las cosas podrían ir mejor para la mayoría de la población.

El trilerismo político de CiU

Aunque Mas se ha presentado como un héroe independentista, no está en su agenda emprender seriamente el camino de la separación. A los empresarios catalanes les viene muy bien polarizar la sociedad en torno a la cuestión nacional y tratar de sacar ventajas en el plano económico, pero no quieren la independencia. Eso no quiere decir que la burguesía catalana no utilice la carta de la independencia en el futuro, en un contexto de revolución socialista, con el objetivo de descarrilarla.

La agenda “independentista” de Mas se fue moderando conforme el *Onze de Setembre* se iba quedando atrás. De forma solemne, el 26 de septiembre, se aprobó una resolución muy ambigua en el Parlament, de-

fendida por CiU y apoyada por ERC, ICV-EUiA, SI, el diputado no adscrito Joan Laporta (DC) y de un diputado del PSC. Este es el párrafo sobre el referéndum: “El Parlament constata la necesidad de que el pueblo de Catalunya pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo e insta al Govern a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura”. El momento y el tipo de pregunta quedan en una total indefinición. Luego Mas introdujo más elementos de ambigüedad: “No hablamos de ruptura, sino de estructuras de Estado”; que los procesos soberanistas necesitan “grandes mayorías”; que “Estado propio no significa independencia” (sic), que antes de que haya una consulta popular había que garantizar la permanencia de Catalunya en la zona euro, que primero se agotarían las vías de la legalidad española y europea, etc.

Lo que no es nada ambiguo es el objetivo de CiU de cara a las próximas elecciones: crear un clima de polarización entre partidarios y contrarios de la independencia, en forma de plebiscito en torno a la figura de Mas. De esta forma, la burguesía catalana orilla el debate sobre los recortes sociales y los ataques que CiU ha llevado a cabo contra los derechos de la mayoría, y sacan el máximo provecho también de la profunda crisis en la que está sumido el PSC que se debate entre el seguidismo hacia el nacionalismo español o el nacionalismo catalán. Tras las elecciones, CiU y la burguesía catalana reanudarán su plan de recortes y “administrarán la batalla soberanista” a su conveniencia, en función de muchos factores, fundamentalmente de la intensidad de la lucha de clases.

El papel de la clase obrera y la posición de los marxistas

Es verdad que en los últimos años se ha producido un incremento de las personas que simpatizan o defienden abiertamente la independencia en Catalunya. La base de esta tendencia está en la profunda crisis general del sistema capitalista y en la incapacidad de la dirección de las organizaciones de la clase obrera de ofrecer una alternativa revolucionaria a la misma. Sin embargo, es completamente falso deducir de esta tendencia que la movilización de la clase obrera va a quedar relegada a un segundo plano en Catalunya a partir de ahora. En los acontecimientos que están por venir, y parece que está fuera de dudas que la lucha de clases entrará en una fase de más enconamiento, el aspecto central será el papel que juegue el movimiento obrero.

La manifestación de la Diada fue masiva, pero igual o más masivas han sido muchas de las manifestaciones obreras de los últimos años. La mayoría de los trabajadores catalanes no ven el ascenso del independentismo en Catalunya con euforia, más bien lo ven o con resignación o incluso con preocupación. Comprenden que los ataques que están sufriendo son obra tanto de Rajoy como de Artur Mas y la burguesía catalana. Por eso no debemos olvidar que paralelamente al crecimiento de las ilusiones independentistas en la sociedad catalana (con más fuerza entre las capas medias), la clase obrera y la juventud de Catalunya ha participado hombro a hombro con los trabajadores y los jóvenes del resto del Estado en todas y cada una de las movilizaciones más importantes. La propia crisis capitalista, que tiene una dimensión internacional, ejerce también un papel de unificar la lucha a una escala cada vez más amplia, de dotarla de un contenido internacionalista concreto. De hecho, la convocatoria de una huelga general estatal y más aún si fuera conjunta con la clase obrera portuguesa, como se está barajando, sería tremendamente positivo en este sentido.

¿Cuál es la posición de los marxistas ante la agudización del problema nacional en Catalunya? En primer lugar defendemos una política de independencia de clase e in-

ternacionalista frente a las maniobras reaccionarias de la burguesía española y de la burguesía catalana, sin hacer la más mínima concesión a ninguna de las dos. Combatimos con firmeza a la burguesía españolista, responsable de la opresión nacional y la represión de los derechos democráticos-nacionales de Catalunya, de Euskal Herria y Galiza. Los marxistas estamos en primera línea de la lucha contra todos los prejuicios ponzoñosos y reaccionarios que introduce el españolismo entre la población contra las aspiraciones democráticas de las nacionalidades históricas. Pero también es fundamental denunciar la utilización de estas aspiraciones por parte de la burguesía catalana o vasca para su propio beneficio, y como maniobra para salvaguardar sus intereses de clase. Precisamente, una de las grandes conquistas de la clase obrera catalana de las últimas décadas, a pesar de su diversidad en cuanto a origen cultural o nacional, es haberse mantenido unida, adoptando una actitud de rechazo tanto al españolismo reaccionario como a la demagogia de CiU.

Oponernos a cualquier tipo de opresión nacional del Estado español contra las nacionalidades históricas, no significa que tengamos que compartir la opinión de que creando nuevos estados capitalistas se vayan a resolver los graves problemas que padece la mayoría. Una Catalunya independiente capitalista significaría que, para competir en el mercado mundial, la burguesía catalana tendría que adoptar medidas aún más drásticas, explotar aún más a la clase trabajadora catalana, recortar más nuestros derechos, salarios y conquistas sociales. Sí, ellos harían grandes beneficios, grandes negocios, pero la clase obrera y los oprimidos no mejoraríamos nuestra situación. Desde el punto de vista de los derechos democráticos, la cosa no sería mucho mejor. Como hemos señalado, CiU ha sido abanderada de la represión contra el movimiento obrero y estudiantil; muchos de sus máximos dirigentes han defendido tesis abiertamente racistas contra los inmigrantes o los trabajadores de otras comunidades autónomas.

Los marxistas defendemos el derecho de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza a la autodeterminación. Pero lo hacemos de una manera muy diferente a la burguesía catalana o vasca: ligamos la lucha por este derecho a la transformación socialista de la sociedad, a derrocar el poder de los capitalistas españoles, vascos y catalanes. Por eso, los marxistas defendemos la libertad de Catalunya, de Euskal Herria y de las naciones oprimidas de la única manera consecuente: la auténtica libertad sólo podrá alcanzarse con igualdad social, librando a la sociedad de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica. Los marxistas entendemos que la lucha por los derechos democráticos nacionales de Catalunya forma parte de la lucha por el socialismo. Y nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la Península Ibérica, en el marco de una República Socialista Ibérica que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.

* Dos semanas después de la declaración del coronel Alacán, la Asociación de Militares Españoles (AME), que agrupa a 3.500 socios, alentaba al poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión”. Así se evitaría que “las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosamente y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial” de la patria. Si tuvieran que tomar cartas en el asunto, no habría “la menor duda” de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la “amenaza de fractura de España” tendrían “responsabilidad castrense”. Así, si de la AME dependiese, cientos de miles de catalanes, vascos y gallegos deberían estar siendo juzgados por tribunales militares, lo cual es bastante significativo de la “consolidación de la democracia” en el ejército.

21 DE OCTUBRE Elecciones autonómicas en Galicia

Derrotar al PP en las urnas y en la calle

Javi Losada
Esquerda Unida - Ferrol

El próximo 21 de octubre se celebrarán las elecciones al parlamento gallego en el contexto económico, político y social más convulso desde la transición y lo va a ser todavía más. De hecho, el PP adelantó las elecciones con el fin de que no coincidieran con los efectos del más que probable rescate de la economía española y una nueva y más dura tanda de ataques sociales. El PP ha puesto ya toda la maquinaria a trabajar para presentar una visión idílica de la realidad gallega pero tendrá más difícil que otras veces hacer que resulte creíble.

Galicia probablemente sea la comunidad autónoma en que históricamente la correlación de fuerzas ha sido más favorable para la derecha de todo el Estado español, de hecho solo en dos ocasiones ha perdido la mayoría absoluta (en 1987 y en las elecciones de 2005, que dieron lugar al gobierno bipartito del PSOE y BNG). Aunque la encuesta del CIS de septiembre le da mayoría absoluta nuevamente, lo cierto es que el resultado se presenta incierto para el PP. Existen, claramente, las condiciones para derrotar a la derecha en Galicia, la clave está en la capacidad de los dirigentes de las formaciones de izquierda para conectar con el amplio descontento social que existe, y que se ha manifestado en continuas movilizaciones (huelga general en Galicia del 27 de enero de 2011, huelga general estatal del 29 de marzo de 2012, desde la huelga general del 29 de marzo, movilizaciones del sector naval, manifestaciones del 19-J contra los recortes, etc.).

La clave del descontento está en los brutales ataques que el PP viene realizando. En primer lugar está el efecto que tiene la política general de Rajoy, que va a ser lo más perjudicial para el PP. Por eso Núñez Feijoo está tratando de aparecer desvinculado del gobierno central. Sin embargo las cosas se pueden torcer bastante, incluso es posible que lo que querían evitar, la solicitud en plena campaña del rescate, se termine llevando a cabo.

Además, los casi cuatro años de gobierno de Núñez Feijoo han supuesto un cierto desgaste también ante su base electoral y, encima, en plena campaña electoral le ha estallado el escándalo del maquillaje de las cuentas gallegas en 2012, con lo que su imagen de "buen gestor" se ha ido al garete. Por supuesto los aspectos que más van a dañar al PP son los recortes generales en sanidad, educación, etc. pero, además, hechos como el escándalo de las preferentes, que afectó en Galicia a miles de personas entre los que una parte apreciable componen la base social del PP y que finalmente han visto como no se les garantizaba la mayor parte del capital invertido, les puede pasar factura. Autónomos y pequeños empresarios, que ya le han visto las orejas al lobo con la subida del IVA, pueden estar pensando en castigar a Rajoy no votando al PP. Feijoo es consciente de que uno de sus principales enemigos es la desmovilización de sus votantes o incluso una cierta dispersión del voto hacia opciones como UPyD o Sociedad Civil y Democracia (el partido de Mario Conde). Por esto, está agitando con el miedo al "tripartito", en alusión a una futura coalición de gobierno PSOE-BNG-AGE (Alternativa Galega de Esquerdas).

Crisis del reformismo

En lo que respecta a la movilización del voto de la izquierda la principal dificultad es el enorme divorcio entre la política de la dirección del PSG y del BNG y las masas, que no se ha reducido sustancialmente desde que perdieron la Xunta. El giro hacia la derecha emprendido desde hace años por el Bloque, por una parte, y la política procapitalista de la dirección del PSG, por la otra, son el principal obstáculo para vencer al PP. La encuesta del CIS antes citada señala una caída de uno o dos diputados al PSG y un mantenimiento o ligera subida del BNG. Ambos partidos presentan candidatos poco conocidos, sin carisma, y además, se encuentran inmersos en una profunda crisis interna.

Lo que permitió al BNG convertirse en la primera fuerza electoral de la izquierda en los 90, adelantando al PSG, fue el hecho de aparecer ante los trabajadores con un



perfil combativo, poco institucionalizado y basado en la militancia. Después de "tocar poder" y aplicar una política socialdemócrata en la Xunta, esa imagen en gran medida se ha diluido.

La dirección del BNG no sólo no ha rectificado sino que, en su giro a la derecha, está acentuando más su discurso puramente nacionalista, que presenta los recortes como el producto del poder centralista de Madrid y obviando la crítica al capitalismo. Sin ir más lejos, Montse Prado, la responsable de campaña, ante la pregunta de un periodista sobre cuál va a ser su alternativa a los recortes, plantea que "más autogobierno, más capacidad para decidir e instrumentos que nos permitan diseñar nuestras propias salidas" (entrevista a *La Voz de Galicia*, 8-9-2012), sin hacer la más mínima referencia al gran capital como responsable.

Alternativa Galega de Esquerda, hay que dotarse de un programa revolucionario

Un aspecto novedoso de estas elecciones es la formación de la coalición electoral Alternativa Galega de Esquerda (AGE), entre Esquerda Unida y Anova (formación escindida del BNG y encabezada por Xosé Manuel Beiras). Por un lado, Beiras es uno de los políticos más carismáticos, si no el que más,

en la historia de la izquierda gallega, producto de su actitud combativa ante el PP en el parlamento gallego en un momento en que ningún cargo institucional tenía esa actitud, ni la capacidad de poner contra las cuerdas dialécticamente al por entonces todopoderoso Fraga. Por otro lado, EU aparece como algo novedoso en la medida que lleva muchas legislaturas fuera del parlamento y sin haberse implicado en tareas de gobierno. Además, algunos potenciales votantes de EU, que en otros momentos no la votaron porque consideraban que como no iba a salir eso significaba tirar el voto y permitir la entrada de la derecha, la votarán en esta ocasión porque sí es una contribución directa para frenar el paso a la derecha.

AGE quiere ocupar el hueco por la izquierda que dejan el BNG y el PSG. Destaca por un discurso que dispone de una carga anticapitalista clara, lo cual es ya de por sí muy positivo. En las bases programáticas del acuerdo se señala: "Debemos ofrecer al pueblo gallego una herramienta que hegemonice en las calles y en las instituciones una política de izquierdas, real, transformadora y anticapitalista capaz de derrotar las políticas impuestas por la derecha". Una perspectiva de superación del capitalismo es fundamental si queremos frenar las próximas ofensivas que nos prepara la burguesía, porque en el marco del capitalismo el margen de maniobra no existe.

Además, otro aspecto muy positivo de AGE es que sitúa en un mismo referente a los sectores de la izquierda no nacionalista con las bases de clase y combativas del nacionalismo gallego, rompiendo con esa división artificial y totalmente perjudicial que a lo largo de las últimas décadas hemos vivido.

Por todo lo señalado anteriormente esta coalición tiene un gran potencial de atracción entre jóvenes y trabajadores que están buscando una alternativa lo cual es un hecho muy positivo. La irrupción de AGE en el parlamento gallego con un discurso anticapitalista y apelando a la fuerza de la movilización en la calle, tendría un grandísimo impacto, no sólo en Galicia sino en conjunto del Estado. Tan importante como el voto, es la necesidad de concretar su perfil anticapitalista en un programa genuinamente socialista, que la convierta en una herramienta eficaz de organización y lucha contra este sistema. Además, para IU, es una grandísima oportunidad de enraizarse en la clase trabajadora y la juventud.

La derrota del PP en las elecciones del 21 de octubre sería una magnífica noticia, no solo para los trabajadores gallegos, sino también para el resto de trabajadores del Estado Español, que verían como la "todopoderosa" maquinaria del PP se resquebraja en el terreno teóricamente más favorable para ella.

Gloria Carneiro

Cristóbal Montoro,
ministro de Hacienda y
Administraciones públicas

El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, se ha arrogado para sí la ingente labor de disciplinar a los empleados públicos. El mismo que entre cartera y cartera utiliza los conocimientos, experiencia y contactos adquiridos para asesorar fiscalmente a honorables contribuyentes interesados en pagar a Hacienda lo menos posible, o no pagar. Siempre, eso sí, dentro de la más estricta legalidad. También asesora sobre inversión en infraestructuras. No en vano a él le debemos la introducción de la financiación público-privada en las autopistas de peaje. Cuando ejerce de ministro, sin embargo, sus principios mutan. Ahora nos arenga con que si pidiésemos las facturas con IVA y declarásemos todo lo que ingresamos, él no se vería obligado a subir los impuestos (IVA e IRPF). Pero los impuestos que han dejado de pagar los clientes a los que él asesoró ya es otro cantar. Mientras advierte que no hay dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos, cobra 1.800 euros en concepto de dieta por alo-

Los jefes de los funcionarios

Un recorrido por la vida de algunos de los que están machacando las condiciones laborales de los empleados públicos

jamiento, pese a tener casa en Madrid (y no una, sino tres), que para eso sobra pasta. Es este ejemplo de ética, dignidad y servicio al interés público el que nos va a disciplinar. Queda claro que no será con el ejemplo.

Agustín Hernández,
conselleiro de Medio Ambiente y
Obras Públicas de la Xunta de Galicia

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Xunta de Galicia, es el firmante de la delirante evaluación de impacto ambiental que justificó el embalse del Umia, uno de los mayores atentados ecológicos de la historia de Galicia y actual problema de salud pública.

En la citada evaluación, Hernández se refería a este lugar como "un paraje sobrevolado por el buitre negro y el águila imperial, y frecuentado por el meloncillo, abejarucos y gallipatos" (especies jamás vistas en Galicia). Demostrando su dedicación al trabajo, el señor Hernández "cortó y pe-

gó" un informe elaborado por otra administración para la provincia de Huelva.

Esta canallada escandalosa y sobradamente conocida no fue impedimento para su designación como conselleiro de Medio Ambiente y Obras Públicas por el señor Núñez Feijoo. En su defensa, decir que el juez justificó su actuación por haber sido realizada en interés de Galicia (para poder recibir una subvención europea). Según esto, la posibilidad de ascenso de un funcionario en la jerarquía administrativa es directamente proporcional a la cuestionabilidad de su actuación, donde la falta de escrúpulos se convierte en el mérito preferente.

Al frente de la Consellería sigue certificando como terminadas obras apenas empezadas, realizadas por empresas constructoras donde trabajó como directivo. De hecho, el señor Hernández entre cargo y cargo en las Xuntas del PP, asesora a grandes constructoras que se benefician de generosos contratos con la Administración, como el Hospital de Vigo.

En este segundo volumen de la colección "Revolución Socialista y Guerra Civil, 1931-1939", editada por la Fundación Federico Engels, se aborda en profundidad el papel de las organizaciones socialistas (PSOE, UGT y Juventudes Socialistas) en esos convulsos y decisivos años. Para conocer más a fondo el contenido del libro entrevistamos a su autor, Carlos Ramírez.

EL MILITANTE.— Con el Partido Popular en el gobierno eliminando derechos sociales fundamentales y devolviéndonos a las condiciones de los años 50 y 60 del siglo pasado, y con un PSOE haciendo una oposición prácticamente inexistente, ¿tiene algún interés, además del meramente histórico, analizar el papel jugado por las organizaciones socialistas en la revolución española de los años 30?

Carlos Ramírez.— La necesidad de conocer a fondo la historia y la experiencia de la lucha del movimiento obrero, tanto la del Estado español como la de la clase obrera internacionalmente, es fundamental para los que aspiramos a acabar con el capitalismo. Creo que ningún revolucionario debería dejar de estudiar la revolución española en todos sus aspectos; el caudal de enseñanzas es inagotable. Pero desde mi punto de vista, este aspecto no agota la cuestión, es simplemente su punto de partida.

La socialdemocracia española intentó poner en práctica la clásica teoría reformista de que "haciéndose con el poder del Estado", desde esa posición, poco a poco, con paciencia, habilidad, sentido de la responsabilidad (sí, esos términos que hoy se nos presentan tan modernos, en 1930 ya llevaban varias décadas formando parte del lenguaje habitual de los partidos socialistas de la vieja Europa), etc., conseguirían colocar al país en la senda de la modernidad, el desarrollo y el bienestar social. Si en esos años esta teoría se derrumbó estrepitosamente en países mucho más desarrollados como Alemania o Francia, en el Estado español el fracaso de estos planteamientos se produjo mucho más rápidamente.

El endémico atraso del capitalismo español y la especialmente reaccionaria clase dominante española, en el contexto de la mayor crisis económica mundial conocida hasta ese momento, mostró lo irreal de esta perspectiva que fue contradicha inmediata-

Balance de una ruptura

Los socialistas en el gobierno, en la guerra y en la revolución

Revolución Socialista y Guerra Civil (1931-1939) • Vol. III

sión gubernamental se cebó contra decenas de miles de trabajadores que luchaban por conseguir de verdad una vida digna.

Este aspecto creo que debe de servir de lección para la realidad actual: el reformismo, en su acepción más "moderna", fracasó hace muchas décadas y en numerosas ocasiones. Aunque parezca que durante años las tesis reformistas de un cambio gradual eran acertadas, y que esa fuera la base para una ofensiva sin cuartel contra las ideas del marxismo revolucionario, la crisis del capitalismo ha demostrado que no era así.

También me gustaría señalar otra cuestión que considero de especial interés tanto histórico como por las grandes lecciones que creo encierra de cara a los acontecimientos futuros que se están gestando en la lucha de clases. Me refiero a la profunda y aguda fractura que la revolución provocó en las organizaciones socialistas.

El empuje de las masas que vieron frustradas sus aspiraciones de una vida mejor, la ofensiva de la reacción a la que le parecían excesivas incluso las tímidas reformas realizadas por el gobierno de conjunción y la amenaza del triunfo del fascismo, acentuada por la subida de Hitler al poder en Alemania y el aplastamiento de la clase obrera austríaca, entre otros factores, tuvieron una honda repercusión en las organizaciones obreras destacando su efecto en las socialistas. En el PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas se produjo un auténtico terremoto que rompió a estas organizaciones de arriba abajo.

Dirigentes que hasta ayer eran protagonistas de la política reformista aplicada hasta ese momento, empezando por el propio Largo Caballero, giraron bruscamente a la



Balance de una ruptura

Los socialistas en el gobierno, en la guerra y en la revolución

CARLOS RAMÍREZ

474 págs. • PVP 15 euros

estuvo una de las claves centrales del posterior desenlace de la revolución española.

EM.— ¿Hasta qué punto el cambio de discurso de este sector era sincero y no se trataba de una maniobra para seguir manteniendo su influencia en el movimiento?

CR.— Desde luego había (y volverán a surgir en el futuro) dirigentes cuya honestidad deja mucho que desear, que están dispuestos a decir casi cualquier cosa para seguir manteniendo su posición dentro del movimiento obrero, y probablemente también los hay, que desilusionados de la experiencia reformista y contagiados del ambiente

era la idea que cautivó a millones de obreros y el ala de izquierdas que se formó dentro de las organizaciones socialistas fue el canal al que se dirigieron esos trabajadores para luchar por la revolución socialista.

El desarrollo concreto de ese proceso de diferenciación interna y su efecto entre los trabajadores, es una de las cuestiones tratadas con más detalle en el libro. Es necesario resaltar que esa afluencia de obreros a las organizaciones socialistas no se produjo de forma acrítica. Los obreros exigían que las palabras se convirtieran en hechos; la convulsión fue tan profunda que podemos concluir que los dirigentes socialdemócratas (izquierdistas o no) perdieron en gran medida el control sobre sus organizaciones, abriéndose un ancho camino a través del cual las ideas del auténtico socialismo, las del marxismo revolucionario hubieran podido penetrar en ellas hasta convertirse en una fuerza real.

El marxismo genuino podría haber conquistado a los obreros socialistas y, a través de ellos a las masas en general, y probablemente la revolución española hubiera tenido un resultado

totalmente distinto. Este aspecto también es analizado en este trabajo. Dirigentes socialistas, sobre todo los de las muy radicalizadas Juventudes Socialistas (JJSS), con Santiago Carrillo a la cabeza hicieron numerosos llamamientos a la Izquierda Comunista Española (ICE), organización que tenía gran prestigio entre un sector de la vanguardia socialista y que formaba parte de la Oposición de Izquierdas Internacional dirigida por León Trotsky. Este grupo, aunque hacía análisis teóricos certeros respecto a la realidad política española del momento, y contaba con un programa más acorde para que la revolución triunfase, mantenía una actitud sectaria respecto a la izquierda socialista liderada por Largo Caballero. Finalmente, despreciando el proceso de diferenciación en el PSOE, UGT y JJSS, en la práctica se quedaron al margen de esta poderosa y numerosa corriente, contribuyendo en gran medida a que todo ese potencial revolucionario que emanaba de las filas de la corriente de izquierda del socialismo español, fuera aprovechada por el estalinismo para hacerse con una potente base de masas.

La radicalización socialista acabó en un gran aborto, pero pudo terminar de otra forma totalmente distinta, con el triunfo de la revolución socialista. En definitiva, y también es un mensaje para el momento actual, las organizaciones de masas sufren los flujos y reflujo de la lucha de clases, las presiones de la burguesía y las del movimiento obrero y la juventud cuando se radicalizan y traspasan los límites de la protesta para iniciar la senda de la participación consciente en política. Por tanto, con este libro y con la colección "Revolución Socialista y Guerra Civil, 1931-1939" no pretendemos realizar un trabajo de carácter académico, sino abordar las lecciones de la lucha de clases del pasado de cara a las tareas que la crisis actual está planteando: acabar con el capitalismo para construir una sociedad más justa, una sociedad socialista.



“Organizaciones de masas que parecían monolíticas y estaban ancladas en una práctica reformista, reflejaron de forma brusca y profunda la intensa ola revolucionaria que estaba recorriendo el Estado español”

mente por la práctica. El Gobierno de conjunción republicano-socialista fracasó de forma inapelable. De 1931 a 1933, las esperanzas de millones de obreros del campo y la ciudad y campesinos pobres fueron defraudadas. Ni una sola de las cuestiones centrales que condicionaban la vida de millones de personas vio mejoras decisivas y mucho menos fueron resueltas. Los salarios, aunque crecieron, seguían siendo muy bajos; la tierra seguía en manos de los grandes terratenientes y estos a su vez continuaban manteniendo en la miseria a los jornaleros y arrendatarios; los derechos democráticos, incluidos los de las nacionalidades históricas, seguían estando muy limitados, etc. Mientras ese gobierno era muy paciente y comprensivo con los capitalistas y los terratenientes, golpeaba duramente a los obreros y campesinos que luchaban por materializar las promesas de mejoras que significó el advenimiento de la República. La repre-

izquierda incorporando a su vocabulario términos como dictadura del proletariado y revolución socialista, presentándolos como objetivos a alcanzar para solucionar los problemas de las masas. Otros dirigentes, como Julián Besteiro o Indalecio Prieto, por supuesto que se mantuvieron en sus tesis y lucharon para mantener al Partido, el Sindicato y las Juventudes en la senda del reformismo y la colaboración de clases. La lucha interna fue intensa y dura.

El discurso izquierdista atrajo la atención de millones de obreros, y decenas de miles se afiliaron a las organizaciones socialistas para fortalecer su ala izquierda frente al sector más derechista. En definitiva, estas organizaciones que parecían monolíticas y estaban ancladas en una práctica reformista, reflejaron en su seno de forma brusca y profunda la intensa ola revolucionaria que estaba recorriendo el Estado español. En el desarrollo de esta batalla interna

revolucionario entre la clase obrera, buscan sinceramente en el marxismo revolucionario la guía para seguir desarrollando su actividad política.

Esta cuestión, aun siendo importante, no la considero la fundamental. El aspecto central, como ya he señalado, es que ese giro, ese nuevo lenguaje, respondía a la realidad revolucionaria del país y tuvo un efecto eléctrico entre sectores decisivos de la clase obrera. ¡Por fin hay dirigentes que en nuestras organizaciones plantean soluciones radicales, entremos en ellas para ayudarles a librarse de los derechistas de siempre! Esa

REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y GUERRA CIVIL (1936-1939)

- I. Las raíces históricas
- II. Los años decisivos. Teoría y práctica del Partido Comunista de España
- III. Balance de una ruptura. Los socialistas en el gobierno, en la guerra y en la revolución
- IV. La revolución inconclusa. El movimiento anarcosindicalista
- V. La izquierda comunista. La ICE, el BOC y el POUM

Recorte de las becas

Entrevista a Manuel Abelleira, Beca y afiliado del Sindicato de Estudiantes

EL MILITANTE.— Estás becado por el Ministerio de Educación, ¿cuáles son tus condiciones económicas y sociales?

Manuel Abelleira.— Mi madre es trabajadora de la limpieza y cobra 900 euros. Mi padre recibe el subsidio para mayores de 52 años: 426 euros. Tengo una hermana que estudia Psicopedagogía y que también está becada. He recibido la Beca General del Ministerio de Educación durante los cinco años de estudio en Santiago de Compostela (Licenciatura en Historia) y aspiro a recibirla el presente año, cursando un Máster de Arqueología en Granada.

EM.— ¿Cuál ha sido la política de becas universitarias del PP?

MA.— Antes, un estudiante obtenía la beca al entrar en la universidad independientemente de cual fuera su media de bachillerato, siempre que cumpliera los requisitos de renta. Ahora, debe poseer una media de 5,5 puntos y, el próximo año 6,5. Por esa vía perderán la beca un 6,75% de los estudiantes.

Además, el gobierno ha congelado los umbrales de la renta necesaria para cobrar la beca del Ministerio de Educación. Los pocos salarios que hayan subido se verán perjudicados por esta medida. Las becas no son progresivas, pasarse un céntimo del umbral permitido por el gobierno implica dejar de cobrar por determinados conceptos. En 2008/09 mi hermana y yo pasamos de percibir 5.400 euros cada uno a 2.800 debido a un exceso sobre el umbral de renta de 6 euros. ¡¡Por 6 euros perdimos 4.400!! Este año esta misma partida de la beca será denegada a una familia de cuatro miembros si superan los 13.909 de renta anual. La mayoría de las familias obreras superan con creces este ingreso. Por eso sólo el 2,27% de estudiantes cobraron esta "beca compensatoria" o "beca-salario" en 2011.

Por otra parte, utilizando el demagógico argumento de que muchos estudiantes universitarios nos dedicamos a tener una vida de desenfreno con estas "grandes becas", se ha elevado el porcentaje de créditos que debemos tener aprobados para acceder a ella. Antes, las carreras técnicas debían aprobar el 60% de los créditos matriculados y el resto de carreras el 80%. Este año las humanidades tendrán que aprobar el 90% y en 2013 este porcentaje se extiende a todas las carreras. Para 2014 los estudiantes de carreras técnicas deberán aprobar el 85%. Con estos porcentajes perderán la condición de becado un 32,7% en 2014. Mediante todas estas medidas, el



gobierno se ahorrará entre 140 y 264 millones de euros.

EM.— ¿Qué hay de cierto en la imagen de estudiantes vividores que siempre nos ha presentado el PP?

MA.— Nada. Los estudiantes que cobran beca sin necesitarla mediante argucias legales son minoría, fundamentalmente hijos de pequeños empresarios, que pueden defraudar a Hacienda. Normalmente el obrero declara íntegros sus ingresos. Por otra parte, la mayoría percibimos la matrícula gratuita y en torno a 3.000 euros, gran parte de lo cual se va en pagar el alquiler de la vivienda. Además, los datos del propio gobierno contradicen esta imagen: los estudiantes becados tardan una media de 5,20 años en terminar su carrera, los no becados 7,14.

EM.— ¿Cuál es tu opinión sobre las becas actuales?

MA.— Son una migaja muy mal repartida. La gran mayoría nos tenemos que aguantar con una beca baja, que interpreta que el precio de la vivienda y de la vida es el mismo en Extremadura que en Madrid o Bilbao y que es claramente insuficiente.

No queremos una beca de residencia. Queremos una red de residencias públicas gratuitas, con todos los servicios, incluida la comida, para que el estudiante no tenga que perder tiempo en cocinar. No queremos una beca-salario de 2.800 euros anuales, que es, al final, otro "salario" precario. Necesitamos una beca salario de 1.100 euros al mes que garantice la independencia económica del estudiante con respecto a la familia, garantizar la adquisición de libros, ropa, viajes que sirvan para la formación académica del estudiante, etc. Frente a la idea de que no hay dinero, hay que repetir lo que se grita en las manifestaciones: "¡Sí hay dinero, lo tienen los banqueros!".



16, 17 y 18 de octubre Huelga general de estudiantes

Entrevista a Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

La receptividad hacia la convocatoria entre los estudiantes está siendo muy buena. De hecho, los recortes ya se están notando en el día a día de los institutos. Cuando informamos en las asambleas, realizadas a lo largo y ancho del Estado, del contenido de la contrarreforma hay mucha indignación. También estamos haciendo repartos de decenas de miles de hojas explicativas, con nuestra plataforma reivindicativa y ya se han formado decenas de comités de lucha en defensa de la enseñanza pública, que están organizando las manifestaciones del 17 de octubre y las actividades con el movimiento obrero, padres y madres, profesores..., que realizaremos durante esos tres días.

Efectivamente, desde el primer día nos hemos dirigido a madres, padres y profesores para contarles cuáles eran nuestros planes y contar con su apoyo. La respuesta ha sido muy positiva, especialmente desde las familias, con la FAPA Giner de los Ríos de Madrid a la cabeza apoyándonos de manera firme en todas las acciones. Con los sindicatos de profesores tenemos previstas diferentes reuniones en los próximos días para organizar una gran manifestación de la comunidad educativa el jueves 18 por la tarde.

EM.— ¿Cómo valora el SE las manifestaciones del 25-S y posteriores, y la reacción del gobierno del PP ante ellas?

TD.— Son una prueba más de que existe un ambiente muy favorable a la lucha y de que hay una crítica muy fuerte entre capas cada vez más amplias de la sociedad, y especialmente entre la juventud, al sistema capitalista. Como no puede ser de otra forma la reacción de la derecha fue histórica y violenta, tratando de criminalizar a una movilización completamente pacífica a través



de una infiltración policial descarada, así como reprimiendo salvajemente a todo el que pasaba o estaba cerca de la zona, como se puede comprobar con los escandalosos vídeos que circulan por Internet sobre la intervención policial en la estación de Atocha el día 25, o en bares de la zona de Huertas (muy alejado del Congreso), en la que varios antidisturbios entraban en bares porra en mano golpeando y sacando a la gente de los mismos.

EM.— Además de estar en el SE, participas en la Corriente Marxista EL MILITANTE, ¿por qué?

TD.— Efectivamente, además de en el Sindicato de Estudiantes, del que formo parte desde hace muchos años, milito en la corriente marxista EL MILITANTE, que es la organización que impulsó la creación del Sindicato de Estudiantes en los años ochenta.

Considero que el principal motivo de todas las injusticias que hay en el mundo y de todos los ataques y las dificultades que tenemos los jóvenes y las familias trabajadoras en general es la propia existencia del sistema capitalista, que se basa en la explotación de la mayoría de la población a manos de una minoría que controla todas las riquezas y es dueña de los bancos, las grandes empresas y los medios de comunicación. Sin embargo, quienes producimos toda esa riqueza es, o somos, esa mayoría explotada, los trabajadores, que somos los que verdaderamente tenemos la fuerza que hace que la sociedad funcione. Esta misma fuerza es la que hay que utilizar para transformar la sociedad. Creo que la única manera de acabar con todos los problemas que nos aquejan es luchar contra el sistema capitalista, algo que sólo se puede hacer a través de una política revolucionaria que cuestione el sistema y luche por la transformación social, donde todos los medios de creación de riqueza estén en manos de la mayoría.

La lucha por mejoras, tanto en educación como en cualquier otro terreno social, no está separada de la lucha política. Pienso que la lucha por el socialismo es la que da un sentido más completo a la batalla que los trabajadores y la juventud tenemos que dar para sobrevivir y defendernos. Por eso estoy organizado en la corriente marxista EL MILITANTE, y llamo a todos los jóvenes en lucha a que también lo hagan.

Brutal subida de tasas en la etapa infantil en la Comunidad de Madrid

Eva Rosmun

La Comunidad de Madrid ha impuesto una subida de tasas de hasta el 175% para este curso escolar en la educación infantil. Además, la Consejería de Educación ha incluido un suplemento lineal de 60 euros para todos los nacidos en 2012, como una multa por ser demasiado pequeños, un verdadero escándalo. Las familias con ingresos más bajos, las que están dentro del primero de los cuatro tramos de renta que determinan las cuotas de escolarización, son las que tienen que asumir la subida porcentual más alta de los precios públicos de las escuelas infantiles.

Ejemplos de subidas de tasas mensuales en el primer ciclo de la etapa infantil

(0 a 3 años) en los dos tramos en los que se concentran la mayoría de las familias: los hogares con ingresos por debajo de 5.485 euros per cápita pasan de 50,99 a 80 euros y los que tienen ingresos de hasta 7.440 euros de 101,97 a 130 euros. A esas cantidades hay que sumar la cuota mensual de 94,2 de comedor y en el caso de los más pequeños, la multa de 60 euros.

El incremento es tan brutal que una de cada tres familias madrileñas ha renunciado a la escuela infantil pública por no poder hacer frente a los costes. Lo que pone en evidencia que la tan cacareada "libertad de elección de centro para las familias" defendida insistentemente por la derecha es pura hipocresía.

El escándalo de los comedores escolares en la Comunidad de Madrid

COMEDORES ESCOLARES (SIN SUBVENCIÓN)	COMEDOR DE POLÍTICOS (CON SUBVENCIÓN)
4,80€	3,55€
MENÚ	MENÚ
1er Plato	1ºs Platos 5
2º Plato	2ºs Platos 5
Pán	(A elegir)
Agua	Pán
Postre	vino
	Postre
	Café
	Licor

Entrevista a Patricia Carlavilla, profesora en el IES Alejo Vera (Marchamalo, Guadalajara)

Durante este inicio de curso el PP en Castilla-La Mancha ha lanzado un nuevo ataque brutal contra la educación pública. Entre primaria y secundaria se han despedido a más de 4.000 interinos este año. El número de centros concertados está aumentando a la vez que los centros públicos se quedan sin recursos para poder atender las necesidades de los estudiantes.

EL MILITANTE.— ¿Cómo han afectado los recortes en Castilla-La Mancha?

Patricia Carlavilla.— En lo que respecta al aumento de las ratios. Pueden llegar hasta 36 en secundaria y 40 en Bachillerato y se están cumpliendo las peores previsiones. Hay grupos enormes incluso en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que son programas muy específicos con alumnos con perfiles muy determinados y cada estudiante tiene sus necesidades y con la masificación los profesores no dan abasto y no se pueden atender en condiciones. Además, en la ESO y el Bachillerato los estudiantes que necesiten cualquier tipo de apoyo o refuerzo no van a ser atendido, y menos todavía si tenemos en cuenta que a los equipos de orientación les han puesto a dar clases de asignaturas que ni siquiera se acercan a su ámbito de competencia con lo que pierden tiempo de atención al alumnado más específico.

EM.— Además de los despidos, ha aumentado el número de horas lectivas que tenéis que impartir. ¿En qué se está concretando?

PC.— Aparte de la masificación, los profesores van muy justos con sus horarios de clase y no tienen ningún hueco. El tiempo de preparación de las clases es voluntario y no entra dentro de la jornada laboral y el problema es que al no tener huecos en los horarios, en la práctica se ha eliminado el tiempo para dar apoyo ni refuerzo. Se ha disminuido el número de PTs, que son los profesores de pedagogía terapéutica (los que atienden las necesidades más específicas) y a los que hay se les ha puesto a dar PCPIs que tampoco era competencia suya, con lo que se sigue perdiendo calidad en la atención a los estudiantes. Además, en Inglés no se puede hacer conversación porque las clases están masificadas y no se pueden hacer desdobles, con lo cual la película que nos quieren vender el bilingüismo es absolutamente falsa porque desde la administración no se ponen los recursos necesarios para que los estudiantes aprendan inglés.

EM.— También se han restringido las sustituciones por bajas cortas...

PC.— El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, desde el principio de curso ha explicado que la tónica general tras los recortes era la normalidad en las aulas. Esto es falso. Hemos empezado el curso sin profesores en las aulas, con lo que en algunas ocasiones en las guardias hay que juntar dos clases, así es imposible hacer nada. Las dos primeras semanas ha habido mu-



chos profesores, hasta el 25% del claustro en algún caso, que faltaban por bajas sin cubrir. Hay casos concretos como en el IES Castilla en Guadalajara donde hay una clase de Educación Física con 65 alumnos, con lo que la calidad de la enseñanza se degrada.

EM.— ¿Qué opinas de la Ley de Autoridad del profesorado cuyo supuesto objetivo es dignificar la figura del profesor?

PC.— Lo primero es que la autoridad en clase no se consigue con una ley. La dignificación de la figura del profesor la estamos perdiendo convirtiendo nuestras condiciones laborales, de unas condiciones bastante dignas en condiciones mucho más precarias. Se nos ha retirado la paga extra, los contratos de los interinos son una sorpresa más que una realidad, te llaman y te despiden según les parece. Tienen la intención de despedir a los interinos en los periodos vacacionales, con las implicaciones que tendrá esto, ya que las listas se moverán y nos podemos encontrar con que en cada trimestre haya un profesor distinto para que la Administración se ahorre diez días de salario. Mientras tanto siguen regalando dinero a la banca a manos llenas. La dignificación de la profesión pasa por tener unas condiciones de trabajo aceptables.

EM.— ¿Cómo piensas que se pueden parar estos ataques?

PC.— Durante este inicio de curso el recorte ha sido tan salvaje que los profesores están un poco en estado de shock. El año pasado fuimos a la huelga en varias ocasiones pero de forma aislada. Yo creo que los sindicatos de profesores tienen que plantear una batalla seria en defensa de la educación pública con un calendario de movilizaciones contundente que tienda además hacia la unificación de la lucha con el resto de los sectores.

Entrevista a Lluís Perarnau, presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Universitat Autònoma de Barcelona (UGT)

“Quieren que las universidades públicas acaben en manos de los bancos”

EL MILITANTE.— ¿Cuál es la situación de la universidad pública en Catalunya después de dos años de política de recortes?

Lluís Perarnau.— Llevamos más de 2.000 despidos en las universidades públicas catalanas, que han afectado principalmente a profesorado contratado y a personal interino. Por otro lado, está el encarecimiento brutal de las tasas universitarias, por encima del 50%, y la restricción en el acceso a las becas, lo que combinado está haciendo que se alce una barrera económica para muchos estudiantes, que no podrán continuar o acceder a la universidad. Además, el gobierno de CiU está promoviendo cambios estructurales en el modelo de universidad pública. No se trata en absoluto de medidas coyunturales o pasajeras. En los documentos de la ponencia sobre “gobernanza de la universidad”, que ha sido elaborada por “expertos” completamente afines a la ideología procapitalista y neoliberal de Mas y Mas-

Colell, se habla de promover una “Universidad de Patronato”, es decir, que la universidad esté constituida como un consorcio público-privado, como ya pasa en la sanidad o en la escuela primaria y secundaria con los centros privados-concertados. En la misma ponencia CiU promueve cambios en los órganos de gobierno de las universidades públicas, introduciendo a los “representantes de la sociedad”, generalmente grandes empresarios, en un nuevo órgano llamado Consejo Ejecutivo. Además, sería este órgano el que elegiría al Rector, que ya no sería elegido por la comunidad universitaria. Y Mas-Colell insiste en que las universidades se busquen financiación privada a través de “mecenas”. Quieren que las universidades públicas acaben en manos de los grandes bancos y grupos financieros, que son los grandes poderes económicos en la actualidad.

EM.— Este curso 2012/13 será decisivo en la lucha por defender la universidad pública de los ataques de la derecha. ¿Qué es lo que deberían hacer las direcciones de CCOO y UGT?

LP.— Todo este panorama que acabo de explicar parece que no es suficiente para que los dirigentes de UGT y CCOO acaben de decidirse para llevar a cabo un calendario de movilizaciones masivas y contundentes. Los ataques se están quedando sin respuesta y esto sólo hace que envalecentar a los gobiernos, tanto el del PP como el de CiU. En el tema del incremento de jornada del personal de administración y servicios (PAS), de 35 a 37,5 horas semanales, se ha seguido una estrategia equivocada por parte de los sindicatos, en el que se ha ido por separado, universidad por universidad, a intentar parar su aplicación... y, desde luego, no ha dado resultado. CCOO, UGT y los demás sindicatos del sector de universidad se deberían reunir en una plataforma y fijar un calendario de movilizaciones contundentes: por los derechos laborales, por la universidad pública. Deberíamos seguir el ejemplo de la convocatoria del Sindicato de Estudiantes, que convoca huelga general de estudiantes los días 16, 17 y 18 de octubre. Los trabajadores saben que con un solo día de huelga no es suficiente. Uno de los peores enemigos a la hora de movilizarnos es el escepticismo y la falta de confianza en unas direcciones sindicales que están demostrando de sobras que no están a la altura de los ataques que sufrimos. Pero no tenemos alternativa al camino de la lucha, y ésta tiene que ser masiva, contundente y sostenida. Debemos presionar para que CCOO y UGT convoquen una huelga general de 48 horas ¡ya!



La FP, cada vez más al servicio de los empresarios

Entrevista a Aleix Collados, estudiante de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial del IES-SEP Comte de Rius (Tarragona) y miembro del SE

EL MILITANTE.— ¿Cómo están afectando los recortes a la Formación Profesional?

Aleix Collados.— Los ataques a la enseñanza pública no sólo vienen de la contrarreforma educativa del ministro Wert, sino que los gobiernos del PP y CiU, en Madrid y Catalunya respectivamente, aumentan más esta demolición del sistema educativo público. Tanto en Madrid como en Catalunya, el principal punto ha sido la imposición de tasas de 360 euros en el caso del gobierno derechista de Artur Mas, a lo que se le tiene que sumar los, por ejemplo, 50 euros que ya pagábamos y todos los gastos derivados de los estudios: material, libros, fotocopias, etc. Con esta imposición de selectividades económicas en los ciclos formativos de grado superior y en la universidad lo que quieren es que la educación no sea pública y accesible a la clase trabajadora.

EM.— ¿En qué consiste la Formación Profesional Dual?



AC.— Es otro ataque. La Formación Profesional Dual no es más que una nueva modalidad de ciclo de grado superior en el que los estudiantes nos formaremos según las necesidades de unas determinadas empresas durante un tercio del segundo curso, mientras que las dos terceras partes restantes las pasaremos en la empresa desarrollando el trabajo de un obrero cualificado, con un mísero contrato de formación y una beca salario de aproximadamente 400 euros. A cambio, las empresas que se adhieran a este nuevo modelo de formación, tendrán una reducción de las cuotas a la Seguridad Social, a parte de tener aún más libertad para explotar a los estudiantes, ya que serán ellas mismas las que marquen el horario de los estudiantes en prácticas. Con este nuevo sistema se pretende regalar los estudiantes de forma descarada a los empresarios en trabajos de temporada, como son el caso de la hostelería y el turismo, los dos sectores con más estudiantes de esta modalidad.

Astilleros sin carga de trabajo

Por una huelga general del sector naval

El verano supuso un punto de inflexión en nuestra lucha para conseguir carga de trabajo, cuya reivindicación central es la construcción de un dique flotante. Hace unas semanas, el consejero delegado de Navantia desestimó el dique por criterios de rentabilidad económica. Además, hemos sabido que definitivamente los quimiqueros para PEMEX (Petróleos Mexicanos) tampoco se van a construir en Galicia. Incluso el anuncio a bombo y platillo, por parte del PP gallego, de la construcción de dos floteles (buques de apoyo logístico para plataformas petroleras en alta mar, uno a construir por Navantia y otro por el astillero vigués Barreras), que suponía una cierta esperanza, no está nada claro tras la declaración de un directivo de la propia PEMEX planteando que no hay cerrado ningún contrato con astilleros gallegos.

Javi Losada
Comisión Ejecutiva CCOO
Astilleros Navantia-Ferrol

Incluso en el caso de que se construyesen los floteles, el futuro después de más de un año de lucha es muy oscuro. A pesar de la publicidad electoral del PP (que cifra la construcción de cada flotel en 1.500 puestos de trabajo durante 30 meses), en realidad sólo daría empleo a unos 400 trabajadores durante 24 meses. Y eso en unos astilleros (Fene y Ferrol) que en los últimos 5 años han empleado a cerca de 6.000 trabajadores. Pero es que incluso el dique flotante (el PP dice que buque o dique) seguiría siendo insuficiente, ya que ambos darían ocupación a unos mil trabajadores (la mitad de la plantilla de la principal), es decir, más del 80% de la plantilla total del astillero seguiría en el paro.

Unificar, extender y radicalizar la lucha

Los comités de empresa (principal y auxiliares), tras el anuncio de inviabilidad del dique flotante, se han encerrado en el Ayuntamiento de Ferrol de manera indefinida en demanda de una reunión con la comisión que estudia la viabilidad del dique. Además está previsto, según se informó en una asamblea general el 1 de octubre, utilizar la campaña electoral de las autonómicas para hacer visible la lucha. Las propuestas son una gran movilización comarcal el 17 de octubre, combinada con acciones sorpresa de boicot.

Por supuesto, hay que poner toda la carne en el asador para que la movilización del 17 sea masiva y tenga un gran impacto so-

cial. Además, hay que aprovechar el hecho de que la fecha elegida coincide con el segundo de los tres días de huelga convocados por el Sindicato de Estudiantes contra los ataques a la educación pública. Hay que hacer un llamamiento a todos los jóvenes, su futuro está en juego también, a participar ese día con nosotros. Pero lo más importante es que los dirigentes sindicales tienen que plantear ya un siguiente paso, superior, en la lucha. No puede ser que nuevamente después de una gran movilización en la comarca no haya ninguna perspectiva inmediata de continuidad.

La falta de perspectiva de trabajo en el sector, tanto en Galicia como en el resto del Estado, supone que decenas de miles de familias estén en una situación límite, al borde del desempleo de forma más o menos inmediata. Las repercusiones sociales del cierre o de una reducción drástica de empleo en los astilleros son dramáticas. Comarcas enteras corren el riesgo de sufrir una profunda pauperización, reeditando situaciones como las que se vivieron en los 80 con la reconversión industrial, y que marcaron profundamente toda una generación. La situación es, por lo tanto, lo suficientemente grave como para convertir la lucha por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en un referente de carácter estatal que suponga una fuente de presión muy importante para el gobierno del PP. Y los trabajadores del sector naval tenemos la fuerza suficiente como para poder hacerlo. La reciente lucha minera puso de manifiesto cómo incluso un solo sector, si actúa de forma unificada y contundente, es capaz de generar una amplísima simpatía social (independientemente de que también en la lucha minera se ha cometido



el error de no tener un plan de continuidad después de la exitosa marcha a Madrid).

De hecho, antes del verano, los marxistas planteamos que los trabajadores de astilleros debíamos sumarnos a la marcha minera y confluir con todo el sector naval del Estado español: la bahía de Cádiz o la ría de Vigo se encuentran luchando por lo mismo. Estos planteamientos están ahora más vigentes que entonces. El sector naval en Cádiz o Vigo sigue sin carga de trabajo, y la comarca de Ferrol en una situación más explosiva, producto del despido de cientos de trabajadores de las compañías auxiliares, de la supresión de la paga extra a los funcionarios y a los trabajadores de Navantia o de luchas abiertas en fábricas como Poligal.

Contribuir a una rebelión social contra el PP

Para que la lucha del sector naval tenga una repercusión similar a la de la minería hay que empezar por unificar la lucha dentro del propio sector naval, un paso que se tendría que haber dado hace mucho tiempo. Sólo hay una manera de hacerlo: convocando ya una huelga general de todo el sector con una marcha a Madrid, como un primer paso de un calendario de lucha que tendría que ir radicalizándose.

Resulta obvio que el PP quiere retrasar el rescate hasta después de las autonómicas

en Galicia y Euskadi porque saben que significará una nueva oleada de recortes. Como aperitivo aprobaron la supresión de la paga extra de navidad para funcionarios y trabajadores de empresas públicas. Es prácticamente seguro que tras el rescate tocarán aquello que era intocable: las pensiones. Este es el contexto en el que nos movemos, nuestro problema no es local o sectorial, sino de clase. La falta de carga de trabajo es producto de la enorme transferencia de riqueza de nuestros bolsillos a los de la burguesía. Por eso no tiene sentido limitar la lucha por la carga de trabajo a una perspectiva local y aislada, separada de la lucha general contra los recortes del PP. El camino lo marca Portugal, donde, por primera vez desde el inicio de la crisis, hemos visto cómo se frenó el intento de rebaja general de salarios.

Un plan de lucha contundente y centralizado del sector naval se produciría en un contexto general de cada vez mayor contestación social y movilizaciones contra la política del PP. Así, la lucha del sector naval y la lucha general contra los recortes se alentarían mutuamente, dándole mayor fuerza y contribuyendo a provocar una auténtica rebelión social que derribe al gobierno del PP e imponga un gobierno que defienda los intereses de la clase obrera, haciendo pagar la crisis a los auténticos responsables, a la gran burguesía.

Represión en TMB

¡Readmisión de Andreu de Cabo!

Nos queremos solidarizar con el compañero Andreu de Cabo, trabajador de TMB despedido y represaliado con falsas acusaciones de agresión y de insultos a sus mandos.

La realidad es bien diferente. El compañero simplemente se limitó a constatar una serie de irregularidades en los gastos ordinarios de la empresa en las que estaban implicados algunos directivos, que con dinero público estaban adquiriendo bienes personales sin dar cuenta a nadie.

A partir de ahí la empresa entra en una estrategia de juego sucio para justificar el despido del compañero. No es casualidad que la empresa se ensañe con él, ya que se había destacado por su apoyo público (siendo delegado sindical de CGT) en favor de los trabajadores en la lucha de los dos días de descanso, sin ser él conductor.

Para la empresa vale todo, las mentiras las pruebas falsas, las amenazas, todo es viable para intentar amedrentar a los trabajadores que no se callan. Solo la unidad

de los trabajadores puede parar esta situación. La ejemplar respuesta de la plantilla y del comité de convenio es lo que hará, sin duda, que la empresa se lo piense antes de represaliar algún trabajador.

El caso de Andreu es un claro ejemplo de represión sindical. Los trabajadores y jóvenes debemos responder como un solo hombre. Hoy es Andreu, mañana puede ser cualquiera. SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS.

¡Por la readmisión del compañero Andreu!
¡Basta de represión y amenazas de la empresa!
¡Viva la solidaridad de los trabajadores!

Enviar mensajes de apoyo, preguntas o lo que consideres oportuno: andreu-admissio@gmail.com

Puedes apoyar económicamente en la cuenta corriente: 2100 / 3277 / 10 / 2100564611

Ràdio-Televisió Valenciana

Contra los expedientes abiertos a 50 trabajadores

El 16 de julio decenas de trabajadores irrumpieron en la emisión en directo de los informativos de RTVV. Estaban indignados de que el telediario, famoso por su absoluta sumisión a los dictados del PP, pretendiera esconder la noticia del día, que además afectaba de lleno a esa casa: la aprobación de un ERE de 1.300 despidos (después se rebajó a 1.200), lo que además implica la práctica desaparición de ese servicio público y su supeditación absoluta a las empresas privadas del audiovisual.

Además de los despidos (paralizados de momento, al parecer porque la Generalitat no tiene la liquidez necesaria actualmente para pagar las indemnizaciones), la dirección ha decidido expedientar a cincuenta trabajadores por la acción del 16 de julio, acusándoles de interrumpir el telediario. Una acusación falsa, ya que en ningún momento evitaron la continuación

del programa, sólo hicieron uso de la libertad de expresión, y de la de información, ya que sólo así se pudo garantizar que los telespectadores pudieran conocer una noticia tan grave.

Ante esta acción reivindicativa, la dirección decidió suspender el informativo y la programación habitual, que no se recuperó hasta horas después. Pero esta decisión es exclusivamente de su responsabilidad. Exigimos la retirada de los expedientes y animamos a firmar la solicitud en www.change.org*

La lucha en RTVV ha de continuar, llamando a la extensión a todo el sector público valenciano, y al sector ferroviario (también en lucha contra la privatización).

*www.change.org/es/peticiones/r%20C3%A0diotelevisi%C3%B3-valenciana-rtvv-demanem-a-rtvv-que-retiren-els-expedients-oberts-als-treballadors#share

Adrià Monfort

Por una nueva huelga general estatal del transporte público

La huelga del transporte público del pasado 17 de septiembre fue un éxito sin paliativos. Los trabajadores de las empresas del sector ferroviario (Renfe, Adif y Feve) secundaron la huelga de forma unánime y masiva, al igual que los trabajadores de las empresas de Metro y autobuses urbanos de Barcelona (TMB) y Madrid (EMT). A pesar de los servicios mínimos abusivos marcados por el gobierno, que llegaban al 75% del servicio en algunos casos, la incidencia de la huelga fue muy notoria.

El detonante de las huelgas en el sector ferroviario es el anuncio del gobierno de la “liberalización” del sector a partir de 2013, con el descuartizamiento de Renfe en cuatro sociedades, lo que conduce directamente a la privatización de la empresa, con el consiguiente deterioro del servicio y de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. La ministra de Fomento, Ana Pastor, con sus cínicas declaraciones acerca de que “entre todos no debemos pagar los costes del mantenimiento del servicio ferroviario que sólo utilizan unos pocos”, pone en evidencia su desvergonzada desfachatez, argumento que por supuesto no es válido en el caso de las ayudas a la banca.

El 17 de septiembre era ya la segunda huelga contra la privatización del sector, pero en esta fecha confluyó con las huelgas del transporte urbano en Madrid y Barcelona contra los recortes aplicados en virtud del Real Decreto 20/2012 que, entre otras cosas, suprime la paga extra de navidad. Esto supone una rebaja salarial de 1.400 euros en TMB y de más de 2.000 euros en el Metro Barcelona. Un verdadero robo. En el caso del transporte en Madrid, a todo esto se suman las insinuaciones del gobierno regional del PP de privatizar el Metro.

Por un plan de huelgas unificado de las empresas en lucha

El éxito de esta huelga no ha movido la posición del gobierno ni un ápice, como era de esperar, pero sí ha conseguido un logro importante: ha sido una demostración efectiva de que los trabajadores están dispuestos a presentar batalla, a luchar por defender sus derechos, y muestra el camino que deben seguir los dirigentes sindicales: unificar las empresas en lucha y no dispersar y dividir los conflictos.

Tras el 17 de septiembre, los comités de empresa han confeccionado distintos planes de lucha. Los trabajadores de Metro y autobuses de Madrid protagonizaron nuevos paros parciales los días 21 y 28 de septiembre, y el 1 de octubre. Este mismo día hubo huelga de 24 horas en TMB autobuses en Barcelona, y marca el camino a seguir: la unificación de las luchas. Por otro lado, los trabajadores del Metro de Barcelona hicieron huelga de 24 horas el pasado 24 de septiembre.

En TMB Barcelona, el comité de convenio (formado por ACTUB, CGT y PSA, que representan la mayoría sindical de conductores y casi el 50% del comité de empresa, y que dirigió la exitosa lucha por los dos días de descanso semanal en 2008 y 2009) convocó junto con CCOO y UGT la huelga del 17 de septiembre, y también la huelga del 1 de octubre, coincidiendo tanto con los paros parciales en la EMT de Madrid como con la inauguración oficial del nuevo invento publicitario de TMB (la nova xarxa de bus), con el que la empresa pretende ocultar el recorte de servicio y el aumento de tarifas.

A pesar de que la huelga del 1 de octubre fue aprobada en asamblea de trabajadores, los dirigentes de CCOO y UGT en la empresa se opusieron a la misma, negándose a dar continuidad a la huelga del 17 de septiembre. A pesar del peso que tiene que no convocaran todos los sindicatos, y de la campaña de miedo y chantaje de la empresa, la huelga tuvo un seguimiento total. Poco más de 20 esquiroleros de una plantilla de más de 2.000 conductores de autobuses. El mismo día se celebró una asamblea masiva de trabajadores, cuyo debate es muy revelador del estado de ánimo y disposición a la lucha existente, no sólo en TMB, sino en todas las empresas del sector.

Los trabajadores de TMB reclaman más contundencia y coordinación

La oferta de la empresa consiste en devolverles los 1.400 euros en 2015, pero a cambio de aceptar una congelación salarial hasta 2017, e incluso así no está garantizada la devolución ante el anuncio de nuevos recor-



Asamblea de trabajadores de TMB el 1 de octubre

tes por parte del gobierno. Una verdadera burla. Dicha “oferta” ha sido aceptada por el SIT, sindicato que en la actualidad preside el comité de empresa, que ha firmado un acuerdo de eficacia limitada (para sus afiliados y aquellos trabajadores que individualmente lo suscriban). Aunque CCOO y UGT no han firmado tal preacuerdo, tampoco convocaron la huelga del 1 de octubre con el argumento de que “hay que cumplir la ley”, es decir, que hay que comerse el real decreto y aceptar el recorte salarial. Ante esta situación, un trabajador propone en la asamblea la disolución del comité de empresa, lo que es apoyado de forma unánime en votación a mano alzada.

La asamblea también decide desconvocar los paros parciales que tenían previstos del 2 al 4 de octubre, y mantienen el paro del 5 de octubre para organizar una nueva asamblea y decidir un plan de movilizaciones más contundente, con una gran huelga de las empresas públicas en Barcelona en octubre. En la asamblea también se decide convocar una reunión de los comités de empresa y trabajadores de las distintas empresas en lucha en Barcelona, para el 10 de oc-

tubre, con el objetivo de formar una coordinadora de lucha y unificar los distintos conflictos.

El 4 de octubre también se celebraron asambleas masivas de la plantilla de Metro, que aprobaron la propuesta del comité de empresa de convocar paros parciales el 7 y el 22, y huelga de 24 horas el 31 de octubre, coincidiendo con la convocatoria de Huelga General de la CGT. Resulta muy revelador que en la asamblea varios trabajadores pidieran al comité de Metro que unificara el conflicto con TMB bus, ya que son la misma empresa y se enfrentan a los mismos ataques.

Para parar los recortes y ataques en el sector del transporte, y en general, es necesario un plan de huelgas y movilizaciones contundente, que unifique los conflictos en lucha. Después del éxito de la huelga del 17 de septiembre, los planes de lucha de cada empresa por su lado no suponen un paso adelante, e incluso pueden llegar a conseguir atomizar y desgastar a los

trabajadores en lucha, como sucedió con la sanidad catalana durante el 2011. Por eso creemos que la propuesta de los trabajadores de TMB de coordinar las luchas, si se concreta y se pone en marcha, sí supone un paso adelante. Un primer paso sería que el comité de convenio de autobuses coja con las dos manos el plan de lucha de Metro, y aunque no se pueda unificar la lucha por arriba, si se hagan confluír las huelgas y unificar los conflictos por abajo, desde las plantillas.

La patronal y el gobierno prefieren enfrentarse a diversos conflictos dispersos y desconectados entre ellos, porque saben que no pueden afrontar un plan de huelgas conjuntas de las diferentes empresas y sectores. Éste es el camino a seguir.

Ni un recorte en las condiciones salariales ni laborales.

Por un transporte público de calidad. No a la privatización.

Por un plan de huelgas contundente y continuado.

¡Por una Huelga General de 48 horas YA!

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana bajo ataque

Ulises Benito

El Govern del PP está realizando una campaña de intimidación hacia los trabajadores de FGV, muy similar a la que cometió contra los de la EMT. Desde hace meses, y con la excusa de que la empresa (que se encarga de las líneas de metro y tranvía de Valencia, Alicante y sus respectivas periferias) no es rentable (según ellos, es deficitaria en mil millones de euros anuales), está amenazando con un ERE de despidos, preparando psicológicamente el terreno para la aceptación de las bajas. Sin embargo, parece ser que en los últimos días están amenazando con un ERE inminente (para finales de mes), que podría suponer el despido de (según fuentes del PP) un mínimo de 400 trabajadores. Unos despidos que, como no puede ser de otra forma, redundarían en el recorte y precarización del servicio (hay fuertes rumores de que la línea 1 de metro dejará de funcionar más allá de Torrent).

Ante esta grave situación, el viernes 28 de septiembre se realizó una multitudinaria asamblea, donde el Comité anunció “mo-



Asamblea de trabajadores de Ferrocarrils

vilizaciones y huelgas” (sin concretar a la hora de escribir esta nota) para “negociar un ERE sin despidos”. El ambiente está caliente, hacía mucho tiempo que no había tanta asistencia a una asamblea.

No se puede separar este ataque de los continuos despidos que está sufriendo todo el sector público valenciano: Ràdio-Televisió Valenciana (1.200), Institut Valencià de la Vivenda (208), educación pública (miles de interinos), sanidad (rumores de cierre del Hospital de Crònics de Porta Coeli) y así

hasta cinco o seis mil trabajadores, que pretende despedir el PP este otoño. Como indicamos una y otra vez desde el Sindicat d'Estudiants, EL MILITANTE y bastantes sindicalistas del sector público, los ataques a la plantilla de la EMT eran el precedente de despidos en el resto del sector público. Como decían muchos trabajadores de EMT y FGV: “cuando acaben con la EMT irán a por FGV”. Lo que no hace sino resaltar la miopía de la mayoría del Comité de la EMT, aceptando un acuerdo de recorte salarial

salvaje, que no garantiza el mantenimiento del empleo, y que evidentemente dificulta la tarea clave para parar esta ofensiva: la confluencia de la lucha en todo el sector público, y dentro de él en el transporte público, como han hecho los servicios públicos de metro y autobús urbano (coincidiendo parcialmente con el sector ferroviario) en Madrid y Barcelona.

Mientras se preparan a podar FGV de servicio y trabajadores, están desmantelando líneas de autobuses (este verano se suprimieron las 21 y 22, especiales a la playa, y ahora se eliminan las 63 y 41, dejando Vinales, Alborai y Mislata sin servicio; y se deja la línea 19 con sólo cuatro autobuses) y disminuyendo la frecuencia de paso. Es urgente que los comités afectados y las federaciones correspondientes extiendan y unifiquen la lucha. La movilización empresa a empresa no salvará a ninguna. Llamamos a los trabajadores de FGV a presionar al Comité para que se dote de un plan de extensión, y a combatir tendencias corporativas que juegan un papel nefasto en la defensa de todos los puestos de trabajo.

Carlos Armengol
Presidente del comité de empresa de SDS
(Cádiz), por CCOO

Trabajadores de SDS en defensa de sus condiciones laborales

El 12 de septiembre, aprovechando una reunión sobre otros asuntos, la empresa manifestó al Comité de Empresa de SDS su intención de modificar el horario. Dicha modificación, implicaba la mayor pérdida de derechos colectiva planteada por la empresa en los aproximadamente cinco años que lleva abierta. Los trabajadores perderíamos nuestro derecho al desayuno como tiempo de trabajo efectivo, lo cual supone trabajar más y cobrar lo mismo, 30 días de jornada intensiva y 7 días de compensación entre Navidad y Semana Santa. Todo esto sin contar que se empeorarían las condiciones de conciliación de la vida familiar y laboral.

Los trabajadores de SDS reunidos en asamblea decidimos el pasado 25 de septiembre de 2012, aprobar por unanimidad una resolución donde hicimos constar el completo rechazo al cambio de horario propuesto por la empresa y la firme intención de luchar por la defensa de nuestros derechos si ésta decidía no dar marcha atrás en el ataque. Con la entrega de la resolución, comenzó un plazo de una semana para que la empresa descartase por escrito el cambio de horario, certificando las condiciones de las que actualmente disfrutamos: jornadas de 42 horas semanales, horario de 8 a 17:30h., desayuno como tiempo efectivo de trabajo, días de compensación en Navidad y Semana Santa y tres meses de jornada intensiva.

La asamblea de trabajadores decide

La asamblea también decidió que si la empresa no retiraba el cambio de horario, se comenzaría el miércoles 3 de octubre una serie de medidas en defensa de las condiciones laborales, de seguridad y salud de la plantilla, que duraría hasta el siguiente martes (incluido), con los siguientes puntos:

1) No realizar funciones por encima de la categoría a menos que se haga efectivo lo



Concentración de los trabajadores de SDS en julio de 2011

indicado en el convenio, esto es, que se pague la diferencia entre nuestro sueldo y el sueldo correspondiente a la función que se nos pide desempeñar.

2) Cumplir estrictamente el horario de entrada y salida.

3) Dado que las horas extras son voluntarias se propone que no se realicen.

4) Realizar un desayuno colectivo de carácter asambleario para ir controlando el estado de la movilización, realizando una concentración frente al edificio.

5) Realizar las pausas visuales de forma colectiva.

La idea es hacer visible el descontento de la plantilla a la empresa. Consideramos que de nosotros depende la defensa de nuestros derechos. Pretendemos demostrar que es nuestro trabajo el que hace avanzar la empresa, que sin nosotros no se lleva adelante nada, que somos ya suficientemente flexibles y que no vamos a tolerar que se nos im-

pongan un empeoramiento tan significativo de nuestras condiciones, que inciden en nuestro tiempo libre y en nuestros salarios. Frente al modelo de rigidez que impone la empresa, los trabajadores vamos a mostrarnos también inflexibles en nuestras labores. Consideramos que si no nos defendemos, entramos en una dinámica en la cual sólo podemos perder. Ahora está encima del tapete el horario que tanto nos costó conseguir, pero si demostramos no ser capaces de defenderlo, el siguiente ataque no tardará mucho en llegar y las últimas reformas laborales, le abren a la empresa un amplio catálogo de recortes sobre el que elegir (salarios, jornada irregular...).

Esta primera acción se enmarca dentro de un programa de lucha creciente por la defensa de nuestro horario. Esperábamos no tener que llegar a poner en marcha estas acciones, que la empresa atendiera a razones y comprendiera que el cambio que propone se

inasumible por los trabajadores y carece de justificación. Pero también teníamos claro que a la clase trabajadora nadie nunca nos ha regalado nada y que todos y cada uno de los derechos que tenemos lo son gracias a la lucha colectiva.

La empresa quiere amedrentarnos

Estas medidas llevaban dos días llevándose adelante con éxito, siendo secundadas por la mayoría de la plantilla, cuando la empresa, demostrando su verdadera predisposición a la negociación, ha mandado un correo a los trabajadores diciendo que la movilización que llevamos adelante es ilegítima y amenazando con sanciones.

Los trabajadores no nos amedrentamos ante esta amenaza, ni mucho menos. Sabemos que lo que a la empresa le molesta es la unión del conjunto de los trabajadores y que no nos hayamos dejado convencer por sus vacíos argumentos de convergencia, ni amedrentar por sus amenazas veladas. Pero, ante el cambio provocado por la empresa, antes de seguir con las movilizaciones, hemos decidido reafirmar el apoyo de los sindicatos, armarnos con las estructuras legales de los mismos y convocar una asamblea.

No vamos a tolerar, ni como Comité ni como plantilla, que ningún compañero sea señalado por parte de la empresa. No queremos mártires ni cabezas de turco. Si la empresa va por ese camino, encontrará un incremento de la conflictividad.

Para terminar queremos agradecer a la plantilla su respuesta y apoyo, cuya verdadera dimensión queda reflejada en la preocupación que hemos despertado en los responsables de la empresa. Si seguimos por este camino, actuando unidos y adoptando las decisiones mediante asambleas democráticas, no nos cabe duda de que con más o menos dificultades y esfuerzos seremos capaces de superar cualquier obstáculo.

Alejandro Fernández
Delegado sindical de Correos • CCOO

Asamblea congregual de CCOO Correos (Asturias)

Unas enmiendas para luchar

El 26 de septiembre se celebró en Oviedo la asamblea congregual de la sección sindical de Correos de CCOO Asturias, inscrita en el proceso del X Congreso Confederal del sindicato. En dicha asamblea defendí ocho enmiendas al documento confederal, aprobadas como mayoritarias (1 voto en contra, 21 abstenciones y 89 votos a favor). Este resultado es una muestra muy clara de que los afiliados de CCOO tienen muchas ganas de luchar y de tener una alternativa coherente a los ataques del PP y a la crisis capitalista.

Por un sindicalismo combativo

El documento confederal insiste en la "necesidad de restablecer el diálogo social" con el gobierno. En contraposición las enmiendas 7ª y 8ª defienden que "la política del mal llamado diálogo social debilitó al movimiento obrero porque condujo a un sindicalismo de gestión. En ellas se plantea otro modelo sindical al actual, que tantas derrotas ha cosechado: "Hace falta un sindicalismo combativo, de clase y democrático", "que rechace todos los recortes", "que unifique y extienda las luchas", "que considere que la negociación sólo tiene sentido si se apoya en la movilización", "que no dependa económicamente del Estado".

Como afirma la enmienda 8ª, la recesión no ha puesto en crisis el sindicalismo de clase (más necesario que nunca), sino un determinado modelo sindical: "Para

acabar con el actual desprestigio de los sindicatos es necesario recuperar un sindicalismo dispuesto a enfrentarse con el capital", "Un sindicalismo que ponga las decisiones realmente en manos de los trabajadores y las asambleas".

La crisis y su alternativa

Las cinco primeras enmiendas definen la naturaleza de la crisis que padecemos y aportan una alternativa real para salir de ella.

La enmienda 1ª caracteriza la crisis como "una crisis de sobreproducción", "el mercado mundial está saturado y las mercancías no encuentran mercados". Por lo tanto, ante la falta de negocio, los capitalistas, para mantener alta su tasa de beneficios deben de extraer más plusvalía de los trabajadores, es decir, explotarnos más y privatizar los servicios sociales. No es una cuestión de mala fe, es la naturaleza del sistema capitalista.

La enmienda 2ª rebate la idea de que pueda existir una suerte de capitalismo de rostro humano: "No hay capitalismo malo y otro bueno", "el problema no es el modelo capitalista (neoliberalismo o keynesianismo) sino el propio sistema".

¿Cuál es entonces la alternativa? Para responder a esta pregunta la enmienda nos

remite a los principios de los estatutos de la Confederación: "CCOO se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática".

La necesidad del socialismo respaldada con entusiasmo

En sintonía con esta idea fundamental, las enmiendas 5ª y 6ª señalan: "La lucha sindical no puede convertirse en un fin en sí mismo (...) CCOO aspira a una sociedad con pleno empleo en la que la aplicación de los enormes avances tecnológicos al proceso productivo repercute favorablemente en la sociedad". "Esta sociedad es perfectamente posible a condición de que nos liberemos del control reaccionario que un reducido número de monopolios, bancos y grandes capitalistas ejercen sobre la riqueza del mundo". Para ello se defienden medidas como: "la nacionalización de la banca, las grandes empresas y los latifundios, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada" y "el control obrero en todas las empresas públicas, con la participación del Estado, los sindicatos y los propios trabajadores en la gestión". "Tenemos un modelo alternativo al capitalismo, el socialismo, donde la participación democrática de

la población controlando los medios de producción y liberando la actividad económica de la lucha por el máximo beneficio a través de la economía planificada, haría posible la sociedad de pleno empleo provocando una auténtica revolución en la cultura, la técnica y el bienestar de todos".

La aprobación mayoritaria del texto de estas enmiendas por parte de los afiliados a CCOO de Correos en Asturias son un síntoma muy claro del nuevo periodo histórico en el que hemos entrado. En la asamblea se respiraba un ambiente muy favorable a impulsar un profundo cambio en la manera de hacer sindicalismo por parte de la dirección. Ya es hora de empezar a frenar los ataques. Es evidente que el callejón sin salida del capitalismo también está llevando a un profundo cuestionamiento del mismo, y la defensa del socialismo, que hace bien poco podía parecer utópica entre muchos sindicalistas fue apoyada con bastante entusiasmo en el debate. Cada vez más, la idea del socialismo aparece de una manera natural en la mente de los trabajadores más conscientes, no como una buena idea sino como una auténtica necesidad. ¡Hay que conseguir que este debate se plantee en todas las asambleas y en el mismo congreso confederal!

¡Vivan las Comisiones Obreras!

Paco Ibáñez

Afiliado CCOO- Arcelor Mittal (Asturias)

V Acuerdo Marco en Arcelor-Mittal

No hay que negociar ningún retroceso en nuestras condiciones laborales

Recientemente Arcelor-Mittal hizo pública su intención de reducir un 25% los costes laborales por medio de reducción de primas de producción, congelaciones salariales varias y un aumento de la jornada laboral de unos doce días al año, modificando el Acuerdo Marco en el que se basan los distintos convenios de fábrica para los 12.000 trabajadores en Asturias, Euskadi, Navarra, Valencia... De no aceptarlo, amenazaba con imponerlo acogiéndose a la última reforma laboral, pese a que el grupo Arcelor-Mittal tiene unos beneficios de unos 5.000 millones de euros.

A nadie se le escapa que aceptar una propuesta así dinamitaría las condiciones de trabajo y supondría el comienzo de un descenso a los infiernos, con continuos ataques y un empeoramiento continuo de las condiciones laborales. Esta "oferta" forma parte de la ofensiva general que ha emprendido la burguesía contra los derechos laborales. Si son capaces de imponer este tipo de medidas, las consecuencias no se harán esperar en el resto de empresas, sería un auténtico tsunami en las empresas auxiliares y en el resto de la industria.

Huelga el 20 de septiembre, tenemos fuerza

Contra esto se convocaron dos días de huelga, el 20 y 29 de septiembre. La primera jornada de huelga en Arcelor ha sido todo un éxito en cuanto al seguimiento. Puede decirse que, al margen de los desproporcionados servicios mínimos, y pese a que no se tenía previsto ningún tipo de manifestación, el paro ha sido casi del 100% en todas las factorías y puso de manifiesto que estamos dispuestos a luchar para defender unas condiciones de trabajo dignas. Todos los que participamos en los piquetes quedamos gratamente sorprendidos por la gran cantidad de compañeros que participamos y por lo poco (por no decir nada) que tuvimos que intervenir. Por primera vez en muchos años, los trabajadores hemos demostrado una pequeña parte de la fuerza que tenemos.

Fruto de esto, en la reunión del lunes 24 de septiembre de negociación del Acuerdo Marco para todas las factorías de Arcelor-Mittal en el Estado español, la empresa ha retirado la amenaza de "imponer unilateralmente" las medidas anunciadas. Este pequeño gesto, que no atañe al fondo del ataque,



Trabajadores de Arcelor a las puertas de la fábrica en la huelga del 20 de septiembre

sino a las formas, ha sido suficiente para que la representación sindical desconvocara el segundo día de huelga, renunciando a utilizar el potencial de lucha de la plantilla para modificar la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores.

"Ahora toca negociar", declaraba a *La Nueva España* Ángel Díaz, responsable de CCOO. Sin embargo, el punto de partida de la empresa se mantiene inamovible: quiere un ajuste que le permita abaratar los costes laborales en torno al 25% en los próximos años. Por tanto, su oferta de "negociar" es muy clara. Negociar cómo se va a efectuar el recorte, es decir, a qué nuevos derechos vamos a renunciar los trabajadores. Porque de contrapartidas, por supuesto, no se habla nada. De hecho, el horno B de Gijón sigue sin fecha de reapertura y desligado de la negociación colectiva.

En la reunión del 1 de octubre para negociar el Acuerdo Marco los sindicatos (UGT, CCOO, USO, ELA y LAB) presentaron sus propuestas para el nuevo acuerdo: subidas salariales del 2% por encima del IPC, reducción de jornada reivindicando la jornada de 35 horas semanales (frente a las 40 o 36 actuales), continuar con el rejuvenecimien-

to de la plantilla por medio de los contratos relevo y alguna mejora en el seguro colectivo. De aceptarse esta propuesta la duración del Acuerdo sería por cuatro años. En principio no parece una mala plataforma, pero conociendo el punto de partida de la empresa será prácticamente imposible conseguirlo sin un plan decidido y continuado de movilizaciones. Lo que tampoco sería de recibo es que esta plataforma sindical se quede sólo en una maniobra en la mesa de negociación, para desentenderse de ella rápidamente.

Retomar la movilización con un calendario más contundente

Esta es una nueva oportunidad para que las direcciones sindicales (principalmente UGT y CCOO, que son determinantes) planteen con firmeza la defensa de las condiciones laborales y del empleo y rompan con la política del mal menor, que propició la firma del Plan Arco que tan negativas consecuencias está trayendo a la plantilla, aceptando EREs sin ningún tipo de oposición, negociando unos servicios mínimos para los hornos altos, ferrocarriles y acerías despropor-

cionados y abusivos que hoy en día son una losa para poder presionar a la empresa. Esta política sólo está cosechando retrocesos y derrotas, y con mayor velocidad y profundidad en épocas de crisis como la actual.

Aceptar más recortes no frenará los ataques, sino que envalentonará aún más a la empresa. Y una derrota ahora nos acercaría a la situación actual de nuestros compañeros de Florange o, como ya les sucedió a los compañeros de Lieja, al cierre de los Hornos Altos, acería, y miles de empleos amenazados. Por eso, en la medida que Arcelor sigue empeñada en mantener este ataque hay que retomar inmediatamente el calendario de movilizaciones, pero de una forma mucho más contundente. Después de que se anunciara una rebaja del 25% en la facturación para las empresas auxiliares, hay que implicar a los compañeros de auxiliares, pues estamos convencidos que ellos serán los siguientes que sufrirán un ataque similar. También hay que vincular a los compañeros de Alcoa, que tienen el futuro de sus puestos de trabajo pendiente de un hilo, y a otras empresas actualmente en conflicto. En la actual situación, la lucha de Arcelor puede convertirse con rapidez en un punto de referencia para miles de trabajadores si hay voluntad sindical para impulsarla. No hay otro camino para vencer. Además, cada día se hace más necesario un plan de lucha a nivel europeo, los ataques y la destrucción de empleo se han hecho cotidianos. Por ejemplo, uniéndonos a los compañeros franceses de Florange, donde el futuro de los dos hornos altos está en entredicho y poniéndose en peligro 629 de los 2.700 puestos de trabajo que hay en la planta. Una movilización unificada de las factorías europeas de Arcelor-Mittal le cerraría la puerta a la empresa para poder desviar la producción a otras plantas del grupo y supondría una presión muy difícil de soportar.

En manos de la empresa privada las condiciones laborales y el futuro de los puestos de trabajo están siempre en entredicho. Cada vez más, la reivindicación de la renacionalización de la empresa y su control por parte de los trabajadores, lejos de ser una quimera, se hace una necesidad para mantener miles de empleos.

Europastry nos quiere cambiar el convenio para recortar nuestras condiciones laborales

Julia Manzanal

En el mes de septiembre se han celebrado varias asambleas en Europastry, empresa dedicada a la elaboración y venta de pan y bollería congelada, en las que se nos ha comunicado que, tras año y medio de negociaciones entre los comités de empresa del sector y la patronal, las intenciones de esta última son, además de no querer atender las pequeñas mejoras que piden los representantes de los trabajadores del sector (que consisten en el mantenimiento de las actuales condiciones y un pequeño incremento salarial del 0,5%), cambiarnos al convenio de panaderías. Esto representaría una bajada salarial del 20% para los nuevos trabajadores que se incorporen a la empresa, y un aumento de la jornada laboral, así como la pérdida de los derechos que tenemos actualmente con el conve-

nio de masas congeladas. Es una jugada que la patronal del sector lleva intentando hacer desde hace ya unos años, y para burlar la resolución judicial que se lo impide, alega que el organismo que gestiona el convenio del sector, ASEMAC, ya no existe, en un intento de que no podamos reclamar el cumplimiento de la misma. Otra de sus intenciones sería aplicar diferentes convenios a los trabajadores de oficinas y los de fábrica, para dividirnos.

A nuestro juicio, los sindicatos UGT y CCOO deberían convocar movilizaciones en todo el sector, que incluyan a los trabajadores de las empresas afectadas, así como la celebración de asambleas conjuntas, en las que los trabajadores decidan democráticamente cómo hacer frente a este brutal ataque de la patronal a nuestras condiciones y derechos laborales.

Firmado el convenio de la sanidad privada en Catalunya

La debilidad invita a la agresión

Alba Luna Suárez
Delegada de CCOO en CIC

El pasado 26 de junio, CCOO y UGT firmaron un convenio de la sanidad privada de Catalunya que supone una serie de retrocesos en los derechos laborales de los trabajadores de este sector, entre otros:

1. Un incremento salarial de tan sólo el 0,5%, muy por debajo del IPC que está en el 3,5% lo que supone una grave pérdida de nuestro poder adquisitivo.
2. Perdemos un día de asuntos propios, y nos imponen un aumento de la flexibilidad horaria de 120 horas al año. Todo esto nos dificultará seriamente compaginar la vida laboral con la familiar.
3. Un aumento de dos días de carencia en el 2º proceso de baja por enfermedad común.

Este convenio se ha firmado sin informar a los delegados ni al resto de los tra-

bajadores. De hecho, durante los dos años de negociación no ha habido ni una sola asamblea. Este retroceso, además, se ha firmado sin llevar adelante ningún tipo de movilización para defender nuestras condiciones y derechos laborales, a diferencia de hace cuatro años, con el anterior convenio, que sí que hicimos una huelga con un amplio seguimiento.

Creemos que el que se haya firmado este convenio sin llevar a cabo ninguna lucha y sin que los sindicatos se hayan apoyado en los trabajadores es un error: no sólo es un retroceso en nuestras condiciones laborales, sino que además significa una invitación a que la patronal se salte el convenio y a que presenten nuevos ataques como está pasando en otros sectores. ¡Más que nunca, los trabajadores necesitamos organizarnos y contar con un sindicalismo combativo y democrático!



Entrevista a Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes

EL MILITANTE.— El 21 septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma educativa, en realidad una brutal contrarreforma. ¿Cuál es vuestra valoración? ¿Cuáles son los puntos fundamentales?

Tohil Delgado.— Desde su llegada al gobierno, el PP está intentando dismantelar y acabar con derechos y conquistas históricas que la clase trabajadora y la juventud arrancaron a través de la lucha. Quieren que los recursos que ahora se destinan a prestaciones sociales se desvíen al pago de la deuda o a sanear la banca. Además, la derecha quiere aprovechar la actual crisis económica para convertir nuestros derechos en un fabuloso negocio para beneficio de unos pocos, de ahí que el dismantelamiento de lo público vaya aparejado de la privatización de servicios básicos.

Este es el contexto en el que se enmarca el brutal ataque a la educación pública lanzado por el ministro de Educación, Wert, que se concreta en varios puntos. Uno de los principales es acabar con el acceso a la educación superior de cientos de miles de hijos de trabajadores. El capitalismo nos depara, a las familias trabajadoras, un futuro de paro y precariedad, así, siguiendo la lógica de la derecha ¿para qué dedicar dinero público a mantener una escuela pública de calidad? ¿No será mejor desviar todo ese capital a manos de banqueros, especuladores y grandes empresarios?

Para ese propósito la contrarreforma educativa toma dos medidas fundamentales. En primer lugar, multiplicar el número de “selectividades” que existirán a partir de ahora en el sistema educativo, pasando de tener una única selectividad al finalizar 2º de Bachillerato en la actualidad, a imponer una en 4º de la ESO (que de no aprobarse impedirá que se pueda cursar el Bachillerato o la FP de Grado Medio), otra al acabar 2º de Bachillerato (que de no aprobarse nos impedirá obtener el título de bachiller aunque lo hayamos aprobado, algo que actualmente no sucedía), y una última prueba para acceder a la universidad a cargo de la Universidad en la que el estudiante quiera matricularse. La imposición de estos exámenes arbitrarios no añadirá más calidad a nuestra educación (que, de hecho, ya se está resintiendo por los recortes) como demagógicamente lo está presentando el PP. Sólo busca expulsar del sistema educativo al mayor número de estudiantes. ¿Qué otro sentido

¡Fuera la contrarreforma educativa de Wert!



16, 17 y 18 de octubre HUELGA GENERAL de estudiantes

tiene impedir a un estudiante que ha aprobado todo el curso pasar al siguiente?

Pero por si esta medida no fuera suficiente, el PP reconfigura la ESO para crear dos itinerarios bien diferenciados: uno encaminado al bachillerato y, con suerte, a la FP de Grado Superior o a la universidad, y otro que conduce a la FP de Grado Medio, masificada, sin plazas suficientes y que proporciona una muy baja cualificación laboral. Para fomentar este segundo itinerario el PP obliga a que, tan pronto como en 3º de la ESO, comience la separación entre unos y otros estudiantes, los que “valen” y los que “no valen”, haciendo en la práctica irreversible la vuelta atrás. Además, se crea un “Consejo Orientador”, que desde 1º de la ESO “aconsejará” a cada estudiante cuál es el itinerario que debe elegir. Así, en lugar de que la escuela contrarreste los efectos de las desigualdades sociales en la formación y en la salida laboral los alimenta y profundiza, determinando a los 14 años, si no antes, nuestro futuro.

La derecha quiere acabar con el acceso a la educación superior de cientos de miles de jóvenes hijos de trabajadores

Este modelo tan segregador se completa con la transformación de los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs) en la nueva FP Básica, que será un tercer itinerario desde los 15 años y que, tras cursarlo durante dos años, los estudiantes ni siquiera tendrán el título de 4º de la ESO, es decir, que saldrán al mercado laboral con la misma cualificación que si hubieran abandonado el instituto en 3º de la ESO. A la pre-

gunta de quién cursará esta FP Básica el PP lo tiene claro: es el destino “para alumnos con dificultades de adaptación o situación socio-económica desfavorable”, así aparece en el texto de la contrarreforma. Es decir, para los que estamos siendo especialmente golpeados por la crisis económica y las familias trabajadoras en general.

EM.— Pocos días después de anunciar esta contrarreforma, el gobierno del PP aprobó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013. ¿Cómo afectan los recortes a la educación pública?

TD.— Tras el recorte de un 21% en los PGE de 2012, este año el recorte en educación suma otro 14,4%, una verdadera salvajada que busca abandonar a su suerte a los centros de estudio públicos. Algo similar pasa con la sanidad que pierde casi un 23% o la cultura con un 19%, eso sí la partida para el pago de la deuda, que no es más que un trasvase de dinero público a los grandes poderes financieros se incrementa en varias decenas de miles de millones de euros.

EM.— Para los días 16, 17 y 18 de octubre el SE ha convocado huelga general de estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de esta movilización? ¿Cuál está siendo la receptividad en los centros de estudio?

TD.— Ante la magnitud de un ataque tan salvaje, la respuesta que debemos plantear tiene que estar a la altura de las circunstancias, por eso hemos propuesto esta huelga de 72 horas que es un primer paso con el que poner freno a los recortes y a esta contrarreforma clasista, que persigue un tipo de escuela que recuerda mucho a la que existía bajo el franquismo. Otro objetivo de nuestra movilización es presionar a los dirigentes de CCOO y UGT para que den el paso ya de convocar una huelga general de 48 horas y adopten una línea mucho más combativa frente a todos los ataques que están machacando a las familias obreras. Las contrarreformas del PP sólo se pueden parar si la lucha alcanza el grado de una rebelión social.

PASA A LA PÁGINA 14

Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

¡Suscríbete! Apoya la prensa obrera



Estado	Normal	Ayuda
español	6 núm. 12 €	23 €
Resto del mundo	12 núm. 23 €	35 €
	6 núm. 23 €	35 €
	12 núm. 35 €	47 €

Envía tus datos y un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícanos con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

Suscríbete
Recibe El Militante en tu casa
Apoya la prensa obrera

D. L.: M-14564-1989

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA	
• Cádiz	678 940 435
• Granada	616 893 592
• Málaga	952 276 563
• Sevilla	619 745 685
ARAGÓN	
• Zaragoza	697 338 376
ASTURIAS	985 550 933
CASTILLA-LA MANCHA	
• Guadalajara	949 201 025
• Puertollano	650 837 265
• Toledo	699 956 847
CASTILLA Y LEÓN	
• Salamanca	653 699 755
CATALUNYA	
• Barcelona	933 248 325
• Girona	657 212 367
• Tarragona	660 721 075
EUSKAL HERRIA	
• Álava	945 231 202
• Guipúzcoa	625 707 798
• Pamplona	635 919 738
• Vizcaya	656 714 818
GALICIA	
• Compostela	679 500 266
• Coruña	600 810 516
• Ferrol	626 746 950
• Vigo	636 217 248
MADRID	914 280 397
MALLORCA	669 262 800
PAÍS VALENCIA	961 339 120

www.elmilitante.net • elmilitante@elmilitante.net